

Lacabana, Miguel. **Petróleo y hegemonía en Venezuela. La construcción de un proyecto nacional democrático-popular en el siglo XXI.** *En publicación: Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales.* Basualdo, Eduardo M.; Arceo, Enrique. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Agosto 2006. ISBN: 987-1183-56-9

Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/basua/C10Lacabana.pdf>

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la Red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>
biblioteca@clacso.edu.ar

MIGUEL LACABANA*

PETRÓLEO Y HEGEMONÍA EN VENEZUELA

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO NACIONAL DEMOCRÁTICO-POPULAR EN EL SIGLO XXI

INTRODUCCIÓN

Este artículo sobre la conformación y evolución de los sectores dominantes en Venezuela se apoya en los elementos conceptuales y metodológicos planteados en el documento inicial del Grupo de CLACSO: “Sectores Dominantes en América Latina” (CLACSO, 2004) y pretende dar algunos indicios de por qué estos sectores pierden parte de la hegemonía que construyeron durante el siglo XX y por qué emerge un nuevo proyecto de país y de Estado nacional. Las sucesivas fases por las que atraviesan el Estado y el petróleo permitirán analizar los distintos modelos de hegemonía planteados a lo largo del siglo XX y en este primer lustro del XXI.

Venezuela es un país petrolero; el Estado ha sido y sigue siendo el dueño del recurso natural y, por lo tanto, tiene unos ingresos extraordinarios a partir de la apropiación de renta internacional. Estos ingresos son distribuidos a través del Estado hacia la sociedad en un proceso que

* Profesor investigador del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), Universidad Central de Venezuela. El autor agradece los comentarios de Cecilia Cariola, Enrique Arceo y Luis Lander. En la primera versión de este artículo colaboraron José Félix Rivas, Nora Guarata y Rosaura Sierra.

no implica redistribución sino sólo distribución desigual por diferentes vías y en función del dominio que los distintos sectores sociales ejercen sobre el Estado.

La importancia fundamental del Estado en el manejo de los recursos económicos ha dado lugar a que la conformación de los sectores dominantes en Venezuela haya sido en, con y a través del Estado. Esta relación ha tomado características particulares a través de la historia. La impronta que dejó la dominación del capital extranjero como fracción dominante, si bien ha variado en el tiempo con base en las reivindicaciones rentistas del Estado y de la clase dominante local, aún perdura. La conformación de una burguesía nacional ligada al comercio, la importación, la construcción, el sector financiero y más tarde a una sustitución de ensamblaje dio lugar a un dominio cuasi-monopólico de la actividad económica por los grandes grupos económicos, haciendo difícil en un primer momento la identificación de fracciones sectoriales de la burguesía, aun cuando a partir de los setenta esta diferenciación se hace más notoria.

En 1958, con el advenimiento de la democracia y los pactos entre los sectores dominantes, de los partidos políticos de masas y el resto de las elites, se construyó un imaginario policlasista. Este imaginario se fue derrumbando al finalizar la década del setenta en la medida en que la renta petrolera no pudo contribuir simultáneamente a la acumulación y la distribución, y los mecanismos de control social y político de los sectores subalternos se debilitaron. El desdibujamiento de los partidos políticos y los sindicatos, la pérdida de su papel mediador entre la población y el Estado junto con el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de la pobreza y la desigualdad social produjeron una fuerte deslegitimación del sistema político y el Estado durante los años ochenta.

Los años noventa marcan un hito tanto en términos del cambio hacia un modelo de desarrollo mercado-céntrico como del intento de algunas fracciones de los sectores dominantes de construir una nueva hegemonía. Las políticas neoliberales aplicadas en esa década profundizaron la frustración acumulada en los ochenta, acrecentaron la pobreza y la desigualdad social y dieron lugar a fenómenos como el *Caracazo* (1989), golpes de Estado (1992), salida del presidente Pérez por corrupción (1993) y un continuo de protesta popular. En la década del noventa, los sectores dominantes fracasaron en su intento de consolidar una nueva hegemonía prescindiendo de las fracciones sociales que forman parte de los sectores populares, aun cuando hubo una fuerte cooptación de dirigentes sindicales, populares y de partidos de izquierda que como nuevos intelectuales orgánicos de los sectores dominantes contribuyeron simultáneamente con la desmovilización y el intento de darle organicidad a la construcción del nuevo bloque dominante. Su fracaso

es evidente. Desde 1998 la lucha hegemónica entra en una nueva fase, donde los sectores populares son el sujeto histórico fundamental de la construcción del nuevo proyecto nacional.

Hemos dividido el trabajo en cinco partes siguiendo hitos importantes en los cambios en la economía teniendo como eje el sector petrolero, en la lucha política, en el papel del Estado y en la conformación de los sectores dominantes que cronológicamente y a grandes rasgos van de 1920 a 1960.

Del período democrático de los sesenta al *boom* petrolero de los setenta. Del cambio del modelo de acumulación producto de ese *boom* al agotamiento de los mecanismos distributivos con base en la renta petrolera. Los noventa como el período de aplicación de las políticas neoliberales y el intento de consolidar un modelo mercado-céntrico y, finalmente, la nueva fase de la lucha hegemónica en el siglo XXI.

1920-1958: LA CONFORMACIÓN DEL PAÍS Y LA CLASE DOMINANTE

El siglo XX venezolano fue corto. Se inicia con la incorporación de Venezuela en la década del veinte como un productor importante en el mercado petrolero mundial (en 1928 llegó a ser el segundo productor mundial y el primer exportador), con la unificación del país lograda por la dictadura de Juan Vicente Gómez, la conformación de una administración pública centralizada, un rápido proceso de urbanización y el desarrollo de un mercado nacional. Más aún, se dice que en realidad el siglo XX venezolano comenzó en 1936, después de la muerte del dictador J. V. Gómez.

Venezuela antes de la explotación y exportación del petróleo era un país marginal para el capital extranjero, con exportaciones agrícolas poco estratégicas y un mercado interno reducido. Un país paupérrimo, “una sociedad inmóvil, detenida, estancada, carente de la vitalidad necesaria para encarar la gran tarea de hacer el progreso material y económico” (Baptista, 2004: 30). El petróleo desarticuló las relaciones de poder existentes; los sectores tradicionales ligados a la agricultura fueron cediendo paso a los sectores capitalistas, y el Estado adquirió una posición hegemónica en tanto dueño del recurso natural y captador de renta internacional. Esta centralidad del Estado continúa en la actualidad. A través de la distribución de la renta, se convierte en el eje estructurador de la economía interna en consonancia con las pautas que imponía el modelo de crecimiento basado en el sector externo. Se trataba de un Estado patrimonial “organizado y administrado por y para el dictador y su camarilla, excluyendo no sólo a las mayorías sino a parte de la clase dominante de cualquier forma de participación política” (Sonntag, 1984: 19). Es decir, un Estado dedicado a mantener el orden y garantizar el desempeño libre de las actividades económicas, en un

todo coherente con el sector hegemónico y el capital extranjero, que necesitaba orden y concesiones petroleras fáciles. Paralelamente, el Estado desarrollaría la infraestructura vial necesaria para integrar al país y expandir el mercado interno en el marco de un sistema fuertemente represivo para con la oposición (Purroy, 1986).

En la medida en que las relaciones capitalistas de producción se volvieran dominantes, las relaciones de clase se reordenaron alrededor del Estado. La burguesía extranjera, representada fundamentalmente por el capital petrolero, es la fracción dominante dentro del bloque de poder, pero simultáneamente se conformaban como sectores dominantes: los terratenientes que se enriquecieron tanto por la venta de tierras rurales a las compañías petroleras previo a obtener concesiones para la explotación petrolera en sus tierras, como por la especulación inmobiliaria con tierras urbanas en el marco de la rápida urbanización y concentración de la población en las principales ciudades del país; la burguesía comercial importadora, fuertemente ligada al capital extranjero; y una burocracia política compuesta de altos funcionarios públicos que utilizaron su posición para acumular riqueza, especialmente a través de las concesiones petroleras.

La identificación de las políticas públicas con los intereses del capital extranjero (claramente anti-industrial) y de la burguesía comercial importadora retrasó la industrialización. El *boom* de consumo que trajo el petróleo se tradujo en la provisión de bienes y servicios importados, jugando un papel significativo en relación con ello el Tratado de Reciprocidad Comercial con Estados Unidos, que en la práctica impidió la producción de rubros posibles para Venezuela a favor de las importaciones desde EE.UU. El atraso de la agricultura también frenó el desarrollo de un sector industrial integrado, cuyo mayor desarrollo tendrá lugar, en un primer momento, en aquellos rubros con *protección natural* y luego por la ampliación del capital comercial importador a la industria de ensamblaje, que más que sustituir importaciones intensifica la dependencia.

La sustitución de importaciones, cuando tiene lugar, es resultado de la expansión del mercado, ya que no es impuesta ni por la ausencia de divisas ni por un proyecto de autonomía. Esto dio lugar a una estrecha correspondencia entre el mantenimiento de las relaciones de dependencia ahora internalizadas en la economía local con el sistema productivo y lo que algunos autores llaman el patrón de consumo deformado (Córdova, 1973). En realidad, era un patrón de consumo que reproducía el patrón de consumo de las economías dominantes y se sustentaba en una distribución del ingreso concentrada y regresiva, que permitía a los sectores de altos ingresos una capacidad de compra sesgada hacia bienes importados. Igualmente, este patrón de consumo se generalizó a menor escala en los demás segmentos de ingresos, espe-

cialmente los de ingresos medios, quienes cultivaron una cultura hacia la compra de bienes importados de EE.UU. fundamentalmente. Esto significa que el patrón de industrialización descansó sobre un patrón de distribución del ingreso que permitía la apropiación de la renta petrolera por parte de los sectores de altos ingresos. En este sentido, el patrón de consumo no era deformado sino bien formado para que la industrialización concentrara el capital al mismo tiempo que concentraba el ingreso (Córdova, 1973). El capital extranjero marcó desde el inicio, directa o indirectamente, la pauta de industrialización. Hasta el ingreso de Venezuela al Pacto Andino en los setenta, no existió ningún tipo de regulación a la inversión extranjera ni control o restricción a la repatriación de utilidades (Purroy, 1986).

Sin embargo, paulatinamente se asiste a un proceso de fortalecimiento y diversificación del capital local. La migración rural urbana, la necesidad de viviendas, la valorización y especulación con tierras urbanas y la instalación de servicios públicos y construcción de vías, en un contexto donde la obra pública es la forma dominante de gasto fiscal, llevó a consolidar una fracción de la burguesía ligada a la actividad de la construcción y a la especulación urbana¹. Los excedentes obtenidos en el sector de la construcción no se reinvierten mayoritariamente en el mismo sino que se derivan hacia la industria y el comercio, donde ese sector social también tiene intereses, dando lugar a un sector dominante que irá adquiriendo carácter monopolístico (Carvallo y Hernández, 1981; Machado de Acedo et al., 1981). Por su parte, la creciente capacidad de ahorro de la población y el proceso de acumulación empresarial llevan al crecimiento del sector bancario. Mientras que el sector tradicional de la burguesía ligado al comercio importador y a la propiedad de la tierra va siendo desplazado desde mediados de los cuarenta –aun cuando algunos de los grandes comerciantes se volcaron hacia actividades de ensamblaje y empaque aprovechando sus vínculos con el capital extranjero (Purroy, 1997)–, será alrededor de las actividades de construcción y sus anexos de producción y comercialización de materiales para la construcción, así como de la actividad bancaria, que se fortalecerán los sectores clave de la burguesía venezolana con el apoyo del Estado, especialmente los peculiares grupos comercial-industriales.

En este proceso de constitución de la clase dominante nacional también van cambiando las relaciones con el capital extranjero a través de las mayores demandas nacionales. La Ley de Hidrocarburos de

¹ Las obras de infraestructura son ejecutadas por grandes contratistas, lo cual contribuye a la concentración de capital en este sector (Furtado, 1957). Entre 1940 y 1960 el gasto público en construcción nunca bajó del 20%, llegando en 1956-1957 al 44% del total (Machado de Acedo et al., 1981).

1943², y en 1948 el famoso *fifty-fifty* (50%-50% de ganancias compartidas) en el negocio petrolero, son muestras claras de este mayor poder de los sectores dominantes locales y de las demandas de la sociedad en su conjunto. Estas medidas, así como las anteriores leyes sobre hidrocarburos, tenían como fin último una mayor reivindicación rentista. El *fifty-fifty* se transformó en una fórmula internacional de negociación de las empresas petroleras y en el contexto internacional de la época dio lugar en Venezuela a un período de expansión de la actividad de extracción y refinación de petróleo y a una tregua entre el capital petrolero extranjero y el Estado que duraría hasta 1958, cuando las condiciones políticas permiten imponerle a las empresas petroleras un nuevo esquema de captación de renta a través de una modificación de impuestos que lleva la participación a 60-40 a favor del Estado (Espinas, 2001).

Las particulares características del desarrollo capitalista impulsado por el capital petrolero extranjero, si bien inicialmente tenían pocas vinculaciones económicas internas, también dieron lugar al nacimiento del primer núcleo obrero venezolano. A su vez, el rápido crecimiento económico y urbano permitió la progresiva irrupción de sectores medios que en un principio estuvieron representados sólo por pequeñas minorías intelectuales, y más tarde por los partidos políticos de masas. De hecho, el llamado trienio (1945-1948) producto del golpe de Estado de 1945 fue la primera experiencia populista que reflejaba los cambios en la estructura social venezolana: “el grupo motor no era la burguesía sino los nuevos sectores medios y su orientación ideológica democrático-desarrollista” (Sonntag, 1984: 17). Los logros salariales eran un objetivo de ese gobierno, que consideraba que el Estado-patrón debía dar el ejemplo en un marco de auge e la actividad petrolera y crecimiento económico del Estado³. Las contradicciones generadas entre estos grupos sociales, la burguesía y las fuerzas armadas llevaron a un nuevo golpe y al derrocamiento del gobierno.

Durante la dictadura de Pérez Jiménez (1948-1958), a pesar del impulso al capital privado, el Estado se reserva para su desarrollo importantes áreas de la economía, especialmente las industrias siderúrgica y petroquímica así como la electrificación. Estas decisiones, sumadas a la crisis producida por la recesión internacional de 1957 que impidió al

2 La reforma petrolera de 1943 “fue un éxito rotundo... El Estado venezolano, como soberano y propietario del recurso natural se equiparó en sus derechos y en sus obligaciones con el Estado estadounidense respecto de las tierras federales; y lo mismo puede decirse, *mutatis mutandi*, en relación con las compañías [petroleras]” (Mommer, 2003b: 134).

3 “Si éramos confesos defensores de un política general de altos ingresos para los sectores laborantes, el Estado-patrón debía dar el ejemplo, mejorando el nivel de sueldos y salarios de quienes trabajan como empleados u obreros a su servicio” (Betancourt, 1956: 298, citado por Baptista y Mommer, 1989: 24).

Estado cumplir sus obligaciones con las contratistas de obras públicas y, en gran medida, a la movilización masiva y al accionar de los partidos políticos, contribuirán a la caída del gobierno dando paso a una nueva etapa de reacomodo del poder político pues, en lo fundamental, el poder económico quedará intacto.

Cabe subrayar empero, que si bien el contexto internacional cambiante (menor apoyo de EE.UU. a las dictaduras) junto con el quiebre de la unidad de las fuerzas armadas contribuyeron para que la burguesía retirara su apoyo a la dictadura y esta fuera derrocada, si bien las contradicciones interburguesas tuvieron importancia en su caída, más decisivas aún fueron las luchas políticas derivadas del crecimiento de los asalariados y de los sectores medios y populares, y el consecuente crecimiento de la influencia del bloque de poder político no coincidente con el bloque de poder económico. Esta falta de coincidencia planteó en su momento la necesidad de cambios en la economía y la modernización y democratización del Estado.

1958-1973: PACTANDO EL POLICLASISMO

Con el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 se inicia una larga etapa democrática que dura hasta nuestros días. Sin embargo, se diferencian varios períodos en términos del reacomodo de las fracciones de la burguesía, la participación de los sectores populares, el papel del Estado y los cambios en la actividad petrolera.

Después de la caída de Pérez Jiménez se firmó un pacto entre los principales partidos políticos (el Pacto de Punto Fijo entre AD-Copei-URD), pero hubo en realidad un pacto tácito entre AD-Copei y significativos sectores de la burguesía para mantener y consolidar el régimen democrático que dio lugar a una vinculación de carácter orgánico desde mediados de los setenta. La burguesía venezolana encontró en esos partidos las organizaciones mediadoras más importantes, que al asumir responsabilidades de Estado le aseguraron la legitimidad y hegemonía del dominio burgués. La burguesía reorganiza el sistema de dominación a través de la mediación de los partidos políticos con amplia base popular como Acción Democrática (socialdemócrata) y COPEI (socialcristiano) y bajo el manto de la democracia representativa, asegurando simultáneamente el control de la población y las condiciones para ampliar la acumulación.

Sin embargo, las fracciones más radicales del movimiento popular que contribuyeron al derrocamiento de la dictadura y que fueron dejadas fuera del pacto tácito entre los partidos mayoritarios, la burguesía, las fuerzas armadas y la iglesia, siguieron su política de reivindicaciones que encontró eco en la población dado el fuerte impacto que

tuvieron sobre las condiciones de vida las medidas económicas de los primeros años del período democrático. La falta de consenso llevó a la necesidad de la represión, y algunos partidos de izquierda optaron por la lucha armada en el contexto del triunfo de la Revolución Cubana. Si bien la lucha armada no tuvo éxito y ya a mediados de los años sesenta no tenía mayor significación, tuvo la virtud de revitalizar la alianza de la burguesía con los partidos políticos y el ejército, dándole a este un papel propio dentro del proceso democrático: la represión. El consenso se construía en el mundo político pero no estaba lo suficientemente consolidado.

En este período se pone en práctica la política e ideología de la sustitución de importaciones como consecuencia del agotamiento de las líneas de sustitución espontánea y, fundamentalmente, por los cambios políticos que acompañaban las crecientes reivindicaciones populares por trabajo y mejores niveles de consumo y la necesidad de legitimidad del nuevo gobierno. Los sesenta fueron la década del Estado promotor y subsidiador en la sustitución de importaciones. Se planteó el desarrollo de las grandes industrias básicas, algunas de ellas en asociación con el capital multinacional, con la idea de contribuir al desarrollo del capital privado en industrias conexas.

La ideología de estas intervenciones fue favorecer al capital privado más que lograr una cierta autonomía y articulación interna de la industria. La burguesía venezolana ha requerido siempre de una dosis extraordinaria de protección estatal explícita y/o implícita: transferencia de fondos públicos, protección arancelaria, subsidios, baja tributación, que le permitían posiciones oligopólicas y altas ganancias. Su capacidad para apropiarse la renta petrolera a través de la acción del Estado y para asociarse con el capital extranjero le permitió controlar la dinámica económica a través de una posición dominante en distintos sectores económicos que la situó como un sector cuasi-monopólico en el aparato productivo interno (Carvallo y Hernández, 1981; Purroy, 1986; Rangel, 1971). Si bien el entrelazamiento en los grupos locales del capital financiero, bancario, industrial y comercial hace difícil identificar la fracción dominante con una determinada forma de capital, es claro que algunos grupos se van diferenciando por sus intereses en ciertos sectores.

En este proceso se revelan contradicciones entre fracciones de la burguesía que se expresan a través de los comunicados y posiciones de dos de las grandes asociaciones de empresarios: Federación de Cámara de Comercio y Producción (Fedecámaras) y Pro-Venezuela. Mientras la primera representa los intereses de la burguesía tradicional ligada al capital extranjero, la segunda es representativa de lo que hasta el mismo partido AD reconoció como la burguesía nacional productiva en contraposición a los mercaderes importadores parasitarios, frente a la

falta de una estrategia empresarial capaz de transformar la economía venezolana y enfrentar la pobreza (Gil Yépez, 1978). Pro-Venezuela se inclinó, junto con el gobierno y los partidos políticos, a promover una política de exportaciones industriales hacia los países menos desarrollados y preferentemente de América Latina y los países socialistas, mientras Fedecámaras auspiciaba la relación con los países desarrollados y EE.UU. Estas diferencias se acentuaron con el apoyo de Pro-Venezuela a la incorporación de Venezuela al Pacto Andino y a la necesidad de una política nacionalista que redujera la penetración extranjera en la economía. Pro-Venezuela afirmaba en 1972:

Justificamos y respaldamos a las empresas del país en la medida que su presencia y trabajo contribuyan a robustecer la independencia económica nacional y, en consecuencia, sean ejecutoras de una política nacionalista, menos dependiente del factor externo. Conviene evitar que se siga acrecentando la participación extranjera en forma competitiva, ubicarla dentro de sus justos límites, para que sea un factor de complementación y se dé campo a la acción nacional en sectores que pueden ser desarrollados por ella [...] la carencia de una verdadera política empresarial ha provocado, en los últimos tiempos, una lucha intersectorial causante de roces y malentendidos y de los más serios cuestionamientos (Pro-Venezuela, 1974: 843).

Este discurso nacionalista estaba fuertemente ligado a la idea de que el petróleo se iba a terminar y que era necesario sembrar el petróleo diversificando la economía. Los enormes recursos financieros sirvieron para mejorar la infraestructura del país, pero fundamentalmente para incrementar los activos financieros externos de una minoría privilegiada con acceso preferencial a los recursos del Estado. “En el bloque interno de poder, el predominio era conservado por las fracciones comercial-financiero, organizadas ya sobre la base de conglomerados, que eran las receptoras y circuladoras principales de la renta petrolera distribuida por el Estado a través del gasto público y los servicios de asistencia financiera” (Porta et al., 1983: 143).

La expansión del mercado interno por los mecanismos distributivos estatales, los cambios cualitativos en la dinámica de acumulación ligados al cambio tecnológico y las altas tasas de ganancia⁴ basadas en las políticas de protección y subvención del Estado contribuyeron a la permanencia del modelo de acumulación basado en la sustitución de importaciones junto con el nuevo modelo de acumulación apoyado en las industrias básicas y destinado a diversificar las exportaciones. Sin

4 En la década del setenta, el capital invertido en el sector industrial se recuperaba en promedio en cuatro años (Naím, 1985: 161).

embargo, el primero irá quedando rezagado respecto del nuevo modelo y dará lugar a un reacomodo de las fracciones de la burguesía y a una nueva concepción del Estado. A partir de 1974 se consolida el nuevo modelo de acumulación: el Estado abandona parcialmente su papel de proveedor de subsidios –aun cuando seguirá financiando la actividad productiva privada– para transformarse en Estado productor y rector (Purroy, 1986).

1974-1989: POLICLASISMO, AUGE Y DECADENCIA

De 1974 en adelante se da una articulación más orgánica entre los actores del pacto tácito, que lleva a muchos miembros de los partidos políticos –AD principalmente– a la condición de actores económicos. El fuerte incremento de la renta petrolera a partir de 1973 le dio al Estado un poder económico inmenso, mucho más grande del que se pudo conocer antes en Venezuela, y permitió una distribución de la renta que fortaleció a los sectores de la burguesía que siempre la habían apropiado, amplió a los sectores medios, y por diferentes vías enriqueció a las burocracias estatales, partidistas y sindicales. Estas, al beneficiarse y enriquecerse, contaron con la base para incorporarse orgánicamente a la burguesía. La fusión de intereses dentro del pacto tácito robusteció aún más el poder de la burguesía local e incrementó su aspiración de proyectarse internacionalmente en lo económico y en lo político. Esta aspiración de una fracción de la burguesía, que fue caracterizada como emergente, motorizó una acción nacionalista (nacionalizaciones del petróleo y hierro) emprendida por el gobierno, que si bien respondía a los intereses específicos de esa fracción de la burguesía también tiene una historia más larga y conflictos de intereses nacionales e internacionales más complejos, incluyendo que en esa década fueron nacionalizadas buena parte de las industrias petroleras transnacionales que operaban en los países de la OPEP.

A pesar de la desigualdad en la distribución del ingreso, la elevación de la renta favoreció de una u otra manera a toda la población. Este fenómeno contribuyó a ampliar y profundizar la base de apoyo del pacto tácito y consolidar el dominio burgués (Carvallo y Hernández, 1981). En Venezuela durante la década del setenta, al igual que ocurrió en otros países de América Latina, los sectores subordinados también lograron su incorporación al sistema político y al Estado como parte de la construcción de la hegemonía por los sectores dominantes en un ambiente social donde predominaba un imaginario policlasista: Venezuela como un país de consensos, sin discriminación social ni racial. Con el tiempo y la caída de la renta petrolera disponible, este mito se irá desmembrando y dará paso progresivamente a la visibilidad del conflicto social de clase.

Durante los setenta y ochenta, especialmente a partir de mediados de los setenta, la lucha por la hegemonía política dentro de la burguesía constituyó el conflicto social principal y fue el motor de los cambios en el Estado. Las contradicciones interburguesas deben entenderse en el marco de los cambios en la dinámica de acumulación. La burguesía industrial *tradicional* siguió defendiendo el sistema de protecciones y prebendas junto con su orientación hacia el mercado interno.

La llamada fracción emergente de la burguesía, que no tiene unas áreas comunes de acumulación, se caracteriza, en primer término, por su comprensión del agotamiento del modelo anterior y del cambio en la estructura del mercado mundial⁵; en segundo lugar, por su control del aparato financiero y, finalmente, por su especial vinculación con el aparato estatal, que le permitió implementar las políticas que en definitiva llevaron al cambio en el rol del Estado y en el modelo de acumulación, orientado ahora a una fuerte articulación con el mercado mundial.

Esta fracción emergente no refiere necesariamente a la creación de nuevos grupos, como han afirmado algunos autores (Purroy, 1986; Proceso Político, 1976), sino que se beneficiaron grupos económicos que ya operaban nacional y regionalmente pero que tenían una posición subordinada dentro de la fracción dominante (Sonntag, 1984; Fontanals, 1981). Los grandes excedentes financieros producto de los excepcionales ingresos petroleros –eje y variable fundamental de la acumulación– y la baja capacidad de absorción productiva de la economía venezolana permiten el surgimiento de esta fracción ligada al sector financiero más que al capital productivo. “La desproporción entre recursos financieros y absorción productiva hace prosperar la utilización especulativa o semi-especulativa del capital, la fuga coyuntural de capitales, etc. Sin duda que el fenómeno de la utilización improductiva de capital se da también intensamente en la nueva fracción de la burguesía, pero aquí se trata de un fenómeno más bien temporal y no esencial mientras no cuaje el modelo de acumulación que ella propugna” (Purroy, 1986: 263). El principal impulso para la adopción de la nueva estrategia provino de una fracción dinámica de la burguesía nacional, la llamada *burguesía emergente*, con sólidos vínculos

5 Las nuevas tendencias experimentaban nuevas formas de asociación con el capital transnacional, dejando estas la inversión directa a expensas de los convenios de comercialización, venta de tecnología, acuerdos de producción conjunta y por licencia y, fundamentalmente, el financiamiento crediticio a través de la gran banca privada internacional. Venezuela se transformó en un campo de operaciones importantes en esta “nueva fase expansiva sostenida en un estadio más avanzado de la internacionalización de las economías. La fracción más dinámica de la burguesía venezolana que impulsaba esta estrategia procura así integrarse a los reordenamientos que apuntan a la consolidación del sistema capitalista” (Fontanals, 1981: 130).

comerciales, financieros y tecnológicos con las empresas transnacionales. En el cuadro político y económico existente hacia 1974, esta fracción resaltaba por su gran influencia en la esfera del gobierno y por el control que ejercía sobre un vasto espectro de ramas y sectores. Mientras la tradicional burguesía industrial siguió vinculada al mercado interno, la llamada fracción emergente reorientó la dinámica de acumulación hacia el mercado mundial. Ante el relativo agotamiento de la sustitución y el flujo de recursos sin invertir, la fracción emergente dirige su mirada al capital extranjero y al Estado tratando de acelerar el desarrollo de las industrias básicas de exportación que necesitan grandes recursos de capital y de materias primas, ambos disponibles en Venezuela. Esto se acompaña con las nacionalizaciones del hierro y el petróleo. Estas nacionalizaciones deben ser vistas como “el fruto de la intensificación de las reivindicaciones de la burguesía nacional en pro de una cuota adecuada de participación en la explotación de los recursos naturales y la burguesía internacional debe adaptarse a este mayor poder de la burguesía nacional” (Purroy, 1986: 272).

La fracción emergente redefine su posición dentro del Estado para ser el nexo con el capital extranjero, instrumentaliza al mismo en beneficio propio, lo compromete directamente en la producción y logra el control político, la hegemonía política dentro de la burguesía, utilizándola para controlar el centro dinámico de la acumulación. Esta nueva actitud frente al Estado implica una profunda gama de transformaciones políticas e ideológicas donde la reforma administrativa es un elemento central que será resistido no sólo por otras fracciones de la burguesía sino por la burocracia partidista y la propia burocracia estatal, que ven en ella un debilitamiento de su posición política, de sus prácticas clientelistas y de su acceso a los recursos del Estado.

A partir de 1974, algunos representantes de la burguesía emergente y una nueva tecnocracia ocuparon posiciones estratégicas en el aparato estatal e influyeron decisivamente en su política. El instrumento fundamental será el V Plan de la Nación que propugnaba la Gran Venezuela. Si bien la burguesía industrial tradicional logra algunas concesiones a través del estímulo industrial, la burguesía emergente logra imponer su criterio con la inversión estatal acelerada y orientada a producir para el mercado mundial: el cambio se refleja en que el Estado ya no es el apoyo a la acumulación sino que es el agente dinámico de la misma, y las industrias básicas el núcleo de la acumulación.

Para manejar estos recursos se necesitaba un nuevo Estado, y allí cumple un papel fundamental la reforma administrativa del Estado conocida como Plan Tinoco (básicamente, creación de institutos autónomos fuera de la égida del Estado central) para evitar las mediaciones burocráticas y partidistas e instalar nuevos mecanismos de ejercicio de la dominación por la fracción emergente de la burguesía.

El gran incremento de la renta petrolera desde 1974 permitió al Estado concentrar un poder económico mayor y, a la vez, contribuir con la distribución hacia distintos sectores de la sociedad, pero beneficiando mayormente a la burguesía. En este proceso también se enriquecieron las burocracias estatales, políticas y sindicales, se amplió la clase media y creció la clase obrera, lo cual contribuyó a reforzar la hegemonía y dominación de la burguesía más allá de las contradicciones entre sus distintas fracciones. Dentro del mismo, jugaron un papel fundamental la libertad cambiaria y la paridad fija con el dólar, que significaba una sobrevaluación del bolívar y uno de los más aceitados mecanismos de transferencia de la renta petrolera (Baptista, 2004; Mommer, 1987; Porta et al., 1983).

Durante el período 1973-1979, la administración de Carlos Andrés Pérez y la burguesía emergente son responsables de la rapidez con que se aceleró la inversión estatal productiva a límites no controlables, tanto con los recursos derivados del incremento de la renta petrolera como del endeudamiento. Este endeudamiento fue masivo tanto en el sector público como en el privado y se dio en el marco de las favorables condiciones existentes en el mercado financiero internacional, pero más tarde, cuando las inversiones productivas no cumplieron su ciclo de retorno de la inversión y demandaron recursos adicionales junto con la caída de los precios del petróleo y el cambio de las condiciones del mercado financiero internacional, comienza a vislumbrarse una crisis fiscal y del bolívar que hubiera necesitado de una reforma tributaria a la cual se opusieron los sectores dominantes, porque afectaba uno de los mecanismos básicos de transferencia de renta a su favor.

El partido Acción Democrática pierde las elecciones a pesar de haber administrado el período de bonanza petrolera más intenso que había vivido Venezuela en el siglo XX, y asume el candidato del partido socialcristiano COPEI. Se crearon expectativas de una modificación de las prioridades hacia los sectores populares, pero estas se esfumaron rápidamente dado que una de las primeras medidas de política económica fue la liberación de precios, que atentaría justamente contra los sectores de menores ingresos. Aparecen en escena los postulados monetaristas, pero se mezclan con aquellos que provienen de la doctrina social de la iglesia y el pensamiento neokeynesiano.

Esta mezcla contradictoria, sumada a la continuidad del endeudamiento público, ahora de corto plazo, opera en un mecanismo perverso:

petrodólares adquiridos por el sector privado venezolano, colocados como depósitos a plazo en la banca internacional, retornados bajo la forma de crédito externo privado relativamente caro para cubrir déficit de caja de un sector público que encontraba problemas de liquidez en el sistema financiero interno debido a la política antiinflacionaria (Porta et al., 1983: 175).

La fuga de capitales reflejaba la lucha entre fracciones de la burguesía y contribuyó a profundizar la crisis interna⁶. Esta fuga de capitales, en parte alentada desde el gobierno a fin de enfriar la economía y a la vez impulsada en gran medida por las acciones financieras especulativas de los grupos económicos y los bancos, estuvo asociada a la sobrevaluación de la moneda, a las expectativas de devaluación y a la falta de oportunidades internas de inversión productiva –fenómeno este último descrito por Alfonso Pérez (1971) como indigestión económica y más conocido en la literatura económica como enfermedad holandesa (Baptista y Mommer, 1987).

El hecho emblemático será el fin de la libre convertibilidad y la devaluación del bolívar después de dos décadas de cambio fijo. Puede considerarse acertado decir que era “alrededor de la tasa de cambio y de la libre convertibilidad que se estructuró, durante ese período, el bloque social dominante: una burguesía que controla los circuitos de importación y de circulación de capital dinero, un conjunto de empresas transnacionales líderes en mercados industriales fuertemente oligopolizados, organizados como terminales de ensamblaje de bienes finales de consumo y una burguesía asentada sobre actividades ‘naturalmente’ protegidas, que combinan la industria de la construcción con la apropiación de renta urbana, una de las formas de transformación interna de la renta petrolera obtenida a escala internacional” (Porta et al., 1983: 153).

El cambio del gobierno socialcristiano por una nueva administración socialdemócrata en 1984 no alterará sustancialmente las tendencias que venían operando con el fin de la renta petrolera como mecanismo central de distribución. El refinanciamiento de la deuda externa⁷ y, particularmente, el otorgamiento de divisas con tasas preferenciales para el pago de la deuda externa privada darán lugar a nuevas transferencias de ingresos y a una fuerte corrupción, donde participan funcionarios públicos y empresarios en detrimento de las políticas sociales y los ingresos del trabajo, conformando una nueva relación Estado-sectores empresariales. En palabras de Mommer:

El capitalismo rentístico venezolano llegó así a su fin y a la fase de transición hacia un capitalismo normal, en medio de una política económica caótica [...] La burguesía venezolana, en medio del auge distributivo, no sólo había logrado apropiarse una parte sustancial

6 Se impone la lógica especulativa del capital financiero que articula los intereses de las fracciones más concentradas del capital, grupos empresariales y empresas transnacionales, que disponían de grandes recursos líquidos en bolívares o capacidad de endeudamiento para transformarlos en divisas y sacarlas del país.

7 El refinanciamiento de la deuda (el mejor refinanciamiento del mundo en palabras del presidente Lusinchí, quien después de salir de su cargo declararía: “la banca internacional me engañó”) resultará una carga adicional para la sociedad.

de la renta actual, sino además de la renta futura, hipotecada con la deuda pública. Con ello se invirtió por completo la situación hasta entonces tradicional en la Venezuela petrolera, de un Estado rico frente a una burguesía relativamente pobre, hoy una burguesía inmensamente enriquecida se enfrenta a un Estado con apuros económicos e impone así, por primera vez, su dominio directo. La deuda externa se revela así como el mecanismo que permitió la expropiación del Estado rentista (Mommer, 1987: 34).

Los ajustes *ad hoc* que se realizan entre 1983 y 1988 por la caída del ingreso petrolero en un contexto de fuertes desequilibrios macroeconómicos, estanflación, crecimiento del desempleo y caída de los salarios reales, reflejan la lucha por la apropiación de una renta disminuida. La devaluación, el control de cambios con tasas diferenciales y el reconocimiento de la deuda privada externa adquirida antes de la devaluación completan una fuerte transferencia de ingresos hacia el sector privado empresarial. La caída de los ingresos reales del trabajo da lugar a un fuerte incremento de la desigualdad en la distribución del ingreso en un contexto fuertemente recesivo, donde el crecimiento del sector informal y los empleos de baja calidad refleja el incremento de la tasa de actividad y el fenómeno del trabajador adicional en las familias pobres para compensar esa caída. Sobrevivir en la pobreza se vuelve una ilusión (Cariola et al., 1992) y el imaginario policlasista se desvanece. Las bases de legitimidad se resquebrajan, pues el Estado ya no puede contribuir simultáneamente con la acumulación y la distribución, y los imaginarios de desarrollo se quiebran (Contreras, 2004) para dar lugar a crecientes sentimientos de frustración y desapego al modelo político.

Esa disminución de la renta petrolera y su incapacidad para contribuir con la acumulación y la distribución desató en la década del ochenta una ofensiva ideológica y política que profundiza el discurso de deslegitimación del Estado y que resalta la ineficacia de las regulaciones del mercado de trabajo y la inflexibilidad de los salarios⁸. Como parte de esta ofensiva, se consolidan grupos de presión formados por empresarios, intelectuales y académicos que asumen el neoliberalismo y más tarde los postulados del Consenso de Washington como la vía para reformar el país⁹. Paralelamente, la tecnocracia petrolera comien-

8 García-Guadilla (1997) hace un extenso análisis de estos grupos y considera al Grupo Roraima como el pionero ideológico de las organizaciones sociales liberales creadas en los ochenta y noventa, más allá de que con el tiempo resaltarán las diferencias entre ellas.

9 "la producción y difusión mundial de ideas (neo)liberales se relaciona no sólo con las prácticas de actores sociales globales, sino también con las de actores sociales locales y nacionales, y resulta de las relaciones transnacionales que establecen entre todos ellos" (Mato, 2005: 135).

za a implementar acciones que son el inicio de la reversión de hecho de la nacionalización petrolera. La vía principal para concretar esos cambios será la puesta en marcha del plan de ajuste y apertura de la economía de 1989, que incluirá la apertura petrolera.

El modelo de dominación en crisis a finales de la década del ochenta incluyó a los sectores subordinados como parte integral del Estado nacional-popular¹⁰ en la medida en que la construcción de la hegemonía hacía necesaria la incorporación de estos sectores subordinados como elemento fundamental de la legitimidad del modelo. A su vez, en este proceso estos sectores se constituyeron como sujetos políticos y tienen en la organización sindical un factor fundamental de agregación política (Portantiero, 1981).

El nuevo modelo implica no sólo una recomposición de los sectores dominantes, sino también una nueva fase de la relación Estado-sociedad en la que se trata de imponer la expulsión de los sectores subordinados del Estado y, fundamentalmente, de revertir los logros políticos, económicos y sociales obtenidos mientras la renta petrolera permitió consolidar el modelo de hegemonía.

1989-1998: EL AVANCE NEOLIBERAL, EL RETROCESO POPULAR Y EL FIN DEL POLICLASISMO

En este período desaparece el proyecto nacional, y así, el desplazamiento del Estado por el mercado y el énfasis en el individuo y su libertad para moldear su vida serán puntos focales de este nuevo sentido común: “redimensionar el Estado y sus funciones (mínimo) y resignificar la idea de ciudadanía con una clara orientación individualista y competitiva [...] el desplazamiento del Estado de conciliación populista, [...] la construcción del mercado como un nuevo principio alcativo para la sociedad venezolana” (Contreras, 2004: 116).

Si bien los sectores dominantes habían desarrollado sus propios intelectuales orgánicos, no habían podido consolidar un partido de derecha que fuera su representante orgánico. Aun así, algunos medios

10 Es interesante resaltar, como lo hacen Portantiero y Vilas, estas características del populismo. El primero afirma que “en la medida en que las características particulares del tránsito a la industrialización no permiten a ninguna fracción asegurar por sí sola el control político de ese pasaje, la hegemonía debe ser producto de una complicada estrategia de transacciones y de una incorporación permanente de clases auxiliares al sistema político. En esta situación, el aparato estatal refuerza sus roles arbitrales y acrecienta su peso como promotor del desarrollo y como regulador de la distribución” (Portantiero, 1981: 164) y el segundo dice que “la lealtad popular al Estado estuvo alimentada por políticas que promovieron la redistribución de los ingresos y una disminución (metamorfosis) de las disparidades sociales. La redistribución obedeció tanto a las demandas sociales (muchas de ellas preexistentes al populismo y sistemáticamente reprimidas o ignoradas hasta entonces) como a las necesidades de acumulación del capital” (Vilas, 2003: 15).

de comunicación masiva e instituciones representantes de la derecha emergente contribuían con el proceso de deslegitimación del Estado y el sistema político, a la vez que apoyaban esas interpretaciones y visiones de la realidad, tanto entre los dirigentes de los sectores dominantes como en parte de los dirigentes de los sectores subordinados. Este no es un proceso sin mediaciones y de intencionalidad directa, sino que en él participan, en gran medida, las burocracias y tecnocracias internacionales. En este sentido su ideología proviene, en parte, de centros de poder extranjeros. El poder de la tecnocracia no derivaba de los votos sino de sus conocimientos y del apoyo de tecnocracias internacionales que reafirmaban continuamente que la única opción era profundizar la liberalización para insertarse en el proceso de globalización en el marco del paradigma *más mercado y menos Estado*¹¹. Los tecnócratas formados especialmente en universidades de EE.UU. y los tecnócratas petroleros serán los encargados de imponer el nuevo sentido común del modelo neoliberal. Las *carencias* partidarias de los sectores dominantes les llevarán nuevamente a profundizar la cooptación del partido del pueblo, Acción Democrática, así como de intelectuales, académicos y dirigentes tradicionalmente ligados al campo popular¹² para imponer su nuevo proyecto de dominación.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos no son procesos sin conflictos. Pueden señalarse, al menos, los siguientes puntos como importantes al respecto: la nueva visión impuesta en 1989 generó contradicciones dentro del partido AD entre los sectores más tecnocráticos y aquellos más apegados a su condición de partido popular y al control del Estado; se generaron fuertes conflictos dentro de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), ya bastante deslegitimada, y de esta con el gobierno; la resistencia de dirigentes e intelectuales del campo popular así como de académicos a esa nueva visión; el disciplinamiento (desempleo y caída de los ingresos reales) impuesto a los sectores populares y sectores medios, muchos de los cuales ingresaron a la categoría de nuevos pobres, conllevó expulsar a amplios sectores de la sociedad al margen de la misma durante la década del noventa y evidenció los efectos perversos del nuevo modelo; fracciones de la burguesía también fueron seriamente afectadas por las políticas neoli-

11 En una conversación, Osvaldo Sunkel afirmaba que “en América Latina dejamos que los organismos financieros internacionales y las elites tecnocráticas, incluidos los economistas entrenados en los EE.UU., adoptaran políticas de libre mercado, retrayendo al Estado sin proyecto nacional de desarrollo” (Sunkel, 2005, en prensa).

12 Una de las vías de cooptación de esos intelectuales y académicos devenidos en consultores y de los propios tecnócratas serán los contratos a través de organismos multilaterales, una situación que se reprodujo en toda América Latina (ver por ejemplo Basualdo, 2002 para el caso argentino).

berales; entraron en escena partidos que de una u otra forma recogían el desacuerdo con el sistema vigente; y la protesta popular de diversos tipos se hizo presente.

Este conjunto de factores no permitió, finalmente, la construcción de una nueva hegemonía y llevará al resquebrajamiento del bloque en el poder de naturaleza fuertemente excluyente.

En diciembre de 1988 Carlos Andrés Pérez gana por segunda vez las elecciones presidenciales en medio de una gran euforia sobre un futuro de mejora generalizada del país (nada lo representa mejor que el lema electoral, “Con CAP se vive mejor”), pero a la vez en medio de una crisis económica con desempleo, inflación, deterioro del Estado y presión para su reforma, deslegitimación de los partidos y del sistema político, expresada entre otros indicios en la abstención sin precedentes en esas elecciones. Además, hay que agregar un conjunto de factores no económicos que son imprescindibles para entender la explosión popular que se produjo el 27 de febrero de 1989, casi inmediatamente después de la toma de posesión del presidente Pérez y de la puesta en marcha del plan de ajuste y apertura de la economía. Esa explosión popular, conocida como el *Caracazo* aun cuando abarcó las principales ciudades del país, marca un antes y un después para el conjunto de la sociedad venezolana.

Las frustraciones acumuladas por la población en la década del ochenta fueron parcialmente compensadas por las expectativas generadas en la campaña presidencial. Sin embargo, estas se esfumaron rápidamente cuando las medidas de ajuste económico de corte neoliberal se pusieron en marcha en febrero de 1989 de la mano del equipo económico del nuevo presidente. El Gran Viraje será el nombre con el cual se tratará de dar fin al viejo Estado populista e imponer un nuevo sentido común individualista y basado en el mercado. La firma de una carta de intención con el FMI que implicó la liberalización de precios y tarifas, el aumento del precio de la gasolina y consecuentemente del transporte, entre otras tantas medidas económicas que afectaban fuertemente la capacidad adquisitiva de los sectores populares pobres y de los sectores medios, en un contexto de fuerte desabastecimiento de productos alimenticios por el acaparamiento derivado de las expectativas de devaluación y liberalización de precios, tornó esas expectativas en frustración social y en rebelión popular espontánea.

Entre los sectores populares pobres y parte de los sectores medios, las expectativas de mejoramiento de las condiciones de vida se habían ido diluyendo a lo largo de la década del ochenta y “habían dejado de asociarse al modelo consumista para ubicarse en el plano de la satisfacción de las necesidades básicas. El descontento acumulado, unido a la falta de reconocimiento por parte del Estado de los esfuerzos desplegados por los sectores populares y su real situación de pobreza,

no encontró una organización social capaz de canalizarlo y de transformarlo en reivindicación y en movilización popular [...] el plan de ajuste fortalece el proceso de pérdida de eficacia de los lazos corporativos y clientelares entre sindicatos y partidos y entre ambos y el petro-estado” (López Maya, 2003: 215). El resultado fue “una explosión anárquica que sólo condujo a una fuerte represión de los sectores populares urbanos (Cariola et al., 1992: 13) aun cuando “tuvo la virtud de evidenciar el cuadro real de la sociedad, sus contradicciones y el abismal deterioro del sistema político que [...] funcionaba con una mínima disposición al cambio” (Carvallo y López Maya, 1989: 49). Se vio claramente la incapacidad de mediación entre el Estado y los sectores populares; los partidos políticos habían perdido casi totalmente esa capacidad de mediación al transformarse en simples máquinas electorales con dirigentes más proclives a formar parte de los sectores dominantes y de la tecnocracia estatal que a sintonizar con los sectores populares a los cuales alguna vez sus partidos representaron. Como dice López Maya:

acentuación de la deslegitimación y descomposición del sistema de partidos y el sindicalismo, incapacidad para resolver la crisis económica, renuencia de los actores a reformarse más la corrupción llevaron al Caracazo (López Maya, 2003: 215).

Esa explosión popular anárquica del 27 de febrero fue el preludeo de una década de inestabilidad política, donde se intentaron dos golpes de Estado en el año 1992, se concretó la salida del presidente Pérez por corrupción en 1993, y se hizo evidente la decadencia de los partidos políticos tradicionales en las elecciones de 1994 que ganó por segunda vez el presidente Caldera apoyado en una coalición de pequeños partidos políticos. Este período estuvo signado por diferentes y dispersas formas de protesta popular (López Maya, 2001; López Maya y Lander, 2000), incluyendo huelgas fundamentalmente en el sector público, dado que la pérdida de legitimidad y el papel acomodaticio de la elite sindical llevaron a una pérdida casi total de su papel reivindicativo en el sector privado. Los mecanismos corporativos habían perdido eficacia y la reconstrucción de la hegemonía del bloque en el poder se tornaba una tarea sin destino.

Una vez superado el impacto (susto) inicial, gracias a la represión por un lado y al papel de la iglesia como conciliador por otro, el gobierno y la tecnocracia neoliberal no tomaron en cuenta las señales que la protesta popular del 27 de febrero le había dado al país y aceleraron la apertura económica y el ajuste estructural, incluyendo la privatización de empresas públicas de los sectores telecomunicaciones, aéreo, industrial, siderúrgico, agroindustrial, hotelero y bancario, con lo cuál se agudizó el deterioro del mercado de trabajo, los ingresos y las condiciones de vida de la población. En este período, como consecuen-

cia de la apertura, se asiste a una intensa reprimarización económica dado que una parte importante de la inversión extranjera se dirige a los sectores petrolero y minero¹³ (Lacabana, 2001). La forma en que se impusieron los cambios dio lugar a conflictos no sólo distributivos sino también con los empresarios acostumbrados por muchos años a los subsidios e incentivos estatales (Hidalgo, 2000).

Como parte de las medidas de ajuste y apertura externa de la economía, el sector industrial –anteriormente protegido– fue expuesto a una competencia externa que resultó imposible sostener en un marco de no-política industrial (“nosotros no elegimos ganadores” era una de las expresiones favoritas de los tecnócratas del ministerio respectivo). Es decir, la política era que el Estado debía inhibirse de intervenir. La política industrial del Estado inhibido fue una no-política (Pirela, 1996). El proceso de desindustrialización fue intenso, especialmente a partir de 1992, cuando en un año el empleo se redujo en 100 mil personas (-20%). Cuatro factores explican este proceso: la caída de la demanda, la apertura externa indiscriminada, la elevación de las tasas de interés producto de la liberalización financiera, y los incentivos que promueven inversiones en el sector no transable (Valecillos, 2001). Sin embargo, las industrias pertenecientes a los sectores hegemónicos con fuertes intereses en el sector bancario no sufrieron las mismas consecuencias. Los préstamos privilegiados dentro de estos grupos no fueron cancelados y contribuyeron significativamente a la crisis financiera de 1994. Las medidas económicas pusieron nuevamente en una situación de privilegio a la fracción de la burguesía comercial importadora, así como la liberalización de las tasas de interés dio al sector bancario una posición dominante en el proceso de acumulación. Al disminuir o desaparecer los incentivos financieros de tasas de interés y carteras de crédito preferenciales para los sectores agrícola e industrial, estos dejaron de ser rentables y se volcaron recursos productivos hacia la especulación financiera y cambiaría en un contexto de sobrevaluación de la moneda nacional.

Uno de los elementos centrales de la apertura económica fue la apertura petrolera, que significó el regreso de las compañías transnacionales petroleras y una progresiva reprivatización de la industria petrolera nacional, y, de hecho, la disminución del poder del Estado para controlar su propia industria y la caída de los ingresos fiscales provenientes de la exportación de petróleo. Dos expertos en análisis

13 Como parte del proceso de reprimarización económica creció el distrito global de negocios de Caracas, dado que los *headquarters* locales de las empresas transnacionales se localizaron allí mientras las operaciones de extracción se realizaban en el interior del país. Esto contribuyó a profundizar la segmentación socio-territorial de la metrópolis.

petrolero, con distinta orientación, afirman sobre este período: “hoy en día, el objetivo central es la expansión de la actividad, de acuerdo con nuestra base de reservas y bajos costos de producción, a expensas de la participación fiscal por barril” (Espinasa, 1997: 538) y “como parte de la Apertura de la economía venezolana al mundo exterior en general, PDVSA fue encargada de la Apertura Petrolera” (Mommer, 2003a: 6).

De esta forma, junto con el proceso de extranjerización de la industria y otros sectores económicos, el capital extranjero afianza su papel dominante dentro de la economía. Este proceso se completará con la venta de bancos estatizados y privados al capital extranjero después de la crisis bancaria de 1994, que fue el mecanismo a través del cual se concretó otra transferencia masiva de ingresos hacia los sectores dominantes. Esta crisis bancaria aceleró la fuga de capitales que llevó a imponer un nuevo control de cambios en 1994, y en 1996 un nuevo ajuste estructural –híbrido en este caso– bajo el nombre de Agenda Venezuela, que no logró estabilizar la economía ni reducir la inflación ni la caída de los salarios reales sino que, por el contrario, agudizó las consecuencias negativas, especialmente para los asalariados.

Desde la perspectiva del mundo del trabajo puede afirmarse que las políticas económicas de los noventa contribuyeron al disciplinamiento de los asalariados y que, en gran medida, el plan de ajuste estructural de la economía no logró los objetivos buscados y se transformó en ajuste del mercado laboral. Multiplicidad de fragmentos del mercado de trabajo con trabajadores sin posibilidad de actuación colectiva, flexibilización externa y desregulación de hecho, caída y creciente desigualdad de ingresos, retroceso en el proceso de salarización, aumento del cuentapropismo, ruptura de la seguridad laboral, ineficiente o inexistente seguridad social, incremento del desempleo de larga duración, feminización del mercado de trabajo, creciente número de jóvenes en peligro de exclusión, pérdida de identidad y ruptura subjetiva con el mundo del trabajo aparecen como elementos determinantes de los cambios en el mercado laboral que, en definitiva, pueden caracterizarse como situaciones de vulnerabilidad y exclusión laboral y, por lo tanto, de vulnerabilidad y exclusión social. En este sentido, no puede hablarse exclusivamente de ocupados y desocupados, formales e informales, pobres y no pobres, sino de diversas dinámicas de fragmentación social que configuran grupos laborales y sociales diferenciados, gran parte de los cuales serán los protagonistas de los cambios que se inician a fines de los noventa (Cariola y Lacabana, 2003).

Como consecuencia de este desfavorable desempeño del mercado de trabajo, la pobreza no sólo se extendió sino que se intensificó y se volvió más heterogénea. Hay más pobres. Los que ya lo eran son aún más pobres, y parte de los sectores medios se incorporaron como nuevos pobres. Además, la desigualdad social se hizo más intensa y los niveles de ex-

clusión alcanzaron grados inusitados para un país rentista. Esta exclusión no sólo es económica sino social, política y simbólica. Las elites habían actuado al margen de los sectores populares, dejándolos fuera de todo mecanismo de integración social y política (Cariola y Lacabana, 2005b).

Los sucesivos ajustes que se implementaron tuvieron un alto costo social, pero no lograron los objetivos de estabilización macroeconómica planteados sino que, por el contrario, los resultados mostraron un comportamiento inverso al esperado y desarticulaban buena parte del sistema de dominación, reduciendo su poder legitimador (Carvalho, 1991). Lo que sí lograron fue que la población se radicalizara y desconfiara aún más de los partidos y líderes políticos y del modelo económico neoliberal, a la vez que se ampliaban las expectativas de una “oferta política más comprometida con el cambio sociopolítico” (Patruyo, 2005: 378). La visión policlasista de las instituciones públicas, así como el imaginario policlasista, tendían a desaparecer (Buxton, 2003; Márquez, 2003). Si a esto le sumamos la caída de los precios del petróleo, que en 1998 llegó a cotizarse por debajo de los diez dólares, la opción para la ruptura del modelo de dominación vigente estaba servida. Con el proceso electoral de 1998, el sentido de la lucha hegemónica cambia y toma un nuevo rumbo, que se agudizará con el resultado de la elección presidencial de diciembre de ese año: una abrumadora mayoría obtenida por Hugo Chávez, apoyado en un movimiento emergente y algunos partidos tradicionales de izquierda y, fundamentalmente, con un discurso anti-neoliberal, que rescataba para los sectores populares un imaginario de inclusión política, social y económica perdido en las décadas anteriores.

1998-2005: LA NUEVA FASE DE LA LUCHA HEGEMÓNICA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO NACIONAL DEMOCRÁTICO-POPULAR

Con el triunfo de Hugo Chávez se inicia una nueva fase de la lucha hegemónica en Venezuela (López Maya, 2003), donde los sectores populares tienen un papel determinante en la construcción del proyecto nacional democrático-popular. A partir de ese momento y con los sucesos desarrollados en los últimos seis años queda claro que el conflicto sociopolítico enfrenta dos modelos diferentes y refleja esa nueva fase en la lucha por la hegemonía¹⁴.

14 “Vista como un elemento histórico, la noción de hegemonía permite especificar la dinámica de la lucha de clases como relación entre fuerzas que han pasado (y están pasando, en el caso de las clases subalternas) por un proceso de constitución tendiente a transformarlas de *clases corporativas* en *clases hegemónicas*. Se trata de un proceso sociocultural complejo que las relaciones de producción contienen pero no agotan porque entre ellas (que definen las clases como *lugares*) y el comportamiento político se establecen una cadena de mediaciones que van plasmando la conexión entre economía y cultura en una configuración de prácticas organizacionales” (Portantiero, 1981: 152).

Uno de los primeros pasos en la construcción de esta hegemonía fue la promulgación en 1999 de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). En ella se plasma el nuevo proyecto nacional; se pasa de la democracia representativa a la democracia participativa; contiene postulados fundamentales para una política nacionalista en petróleo (se impide su privatización) y agua (se declara bien de dominio público) entre otras actividades; y, en gran medida, “se aleja de los postulados neoliberales hegemónicos en el mundo y abre las posibilidades para el ensayo en Venezuela de un proyecto político alternativo” (López Maya, 2003: 221). La CRBV “revela la construcción institucional que ha venido dándose al calor de la movilización popular y la lucha hegemónica” (López Maya, 2003: 218). Estos han sido años de confrontación entre concepciones fuertemente divergentes sobre la democracia y la relación entre el Estado y la sociedad:

la primera de corte nacionalista y populista liderada por el gobierno de Hugo Chávez basada en el modelo de democracia participativa de la Constitución de 1999 y la segunda, de corte liberal [...] liderada por sectores de la sociedad nucleados alrededor de las viejas elites políticas y las elites económicas venezolanas (Duarte y Sierra, 2004: 1).

Aun cuando se hable del chavismo como neopopulista¹⁵ (Boeckh, 2003; Ellner, 2004; Vilas, 2003) a diferencia de las experiencias así identificadas (Fujimori, Menem), el presidente Chávez no sólo ganó las elecciones con un discurso anti-neoliberal y populista, sino que las acciones de su gobierno han sido consecuentes con ese discurso, y le han permitido –podría afirmarse que le seguirán permitiendo en los próximos años– contar con el apoyo del *pueblo* (Parker, 2003; Ellner, 2004). A diferencia del populismo clásico, el chavismo no se articula con una clase obrera fuerte y organizada en grandes sindicatos (Roberts, 2003) –estos estaban en manos de los partidos tradicionales, ya se habían deslegitimado, y en la práctica casi desaparecido porque el mercado de trabajo es preponderantemente informal y precario– sino que se articula con el *pueblo*.

La reflexión sobre *pueblo* es una tarea política e intelectual necesaria en Venezuela y otros países de América Latina. En este sentido,

15 Es interesante lo que plantea Vilas respecto al neopopulismo. “Desde una perspectiva teórico-metodológica, la cuestión del supuesto *neopopulismo* va mucho más allá del supuesto caso particular del populismo y de la mayor o menor proximidad de algunos regímenes políticos recientes a las experiencias históricas ahora consideradas como populistas. Alude a la pertinencia, rigor y alcances de la llamada ‘elasticidad conceptual’ (conceptual stretching) y a la transposición de un concepto históricamente situado, con características constitutivas bien definidas, a fenómenos enmarcados en escenarios que poco tienen que ver con aquéllos y cuyos rasgos constitutivos son presentados con una llamativa ambigüedad” (Vilas, 2003: 14).

Portantiero (1981: 153) señala que *pueblo* “es una unidad de múltiples determinaciones” y Laclau afirma que

el retorno del “pueblo” como una categoría política puede considerarse como una contribución a la ampliación de los horizontes, ya que ayuda a presentar otras categorías –como ser la de clase– por lo que son: formas particulares y contingentes de articular demandas, y no un núcleo primordial a partir del cual podría explicarse la naturaleza de las demandas mismas (Laclau, 2005: 310).

Durante su campaña, Chávez apeló al *pueblo*, y permitió a los sectores dominados un reconocimiento de su propia historia y la recuperación del imaginario democrático: “una de las armas más valiosas que colocó al movimiento [refiere al Polo Patriótico de Chávez] en la senda hacia la victoria fue la incorporación del ‘pueblo’ en el discurso político como sujeto popular, y como el sujeto político que se interpelaba” (López Maya, 2003: 111) y que había desaparecido en el discurso de los años ochenta y principio de los noventa, cuando “las ideas neoliberales –y los tecnócratas que las defendieron– ejercieron una influencia significativa sobre el debate político de los actores en escena” (López Maya, 2003: 119). Un aspecto que no debe dejarse de lado es que el apoyo a Chávez también viene dado por su condición popular, permanentemente reivindicada por él y reconocida por los sectores populares, dado que “se construyó una nueva identidad política popular alrededor de la persona del presidente, dándole expresión política a las desigualdades sociales que habían estado alejadas durante tanto tiempo en el mundo público de Venezuela” (Roberts, 2003: 94).

En la fase actual del Estado y de la lucha hegemónica, la articulación y rearticulación de prácticas organizativas e institucionales y de imaginarios contribuyen a constituir al *pueblo* no sólo como categoría sino como sujeto político y como actor fundamental del bloque histórico en el poder con la tarea de construir y consolidar la hegemonía a partir de un proyecto nacional inclusivo.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA HEGEMONÍA Y EL CICLO INSURRECCIONAL 2001-2003

En el proceso de construcción de la nueva hegemonía, la Asamblea Nacional otorgó a Chávez poderes habilitantes para agilizar la reforma del marco regulatorio en consonancia con los postulados de la CRBV. En noviembre de 2001 y como prolegómeno a la organización de la oposición y a sus acciones para sacar a Chávez del gobierno, se habían decretado una serie de leyes que tendían a cambiar las relaciones de poder económico y, especialmente, a reforzar la capacidad regulado-

ra del Estado. Fueron 49 leyes¹⁶. Entre las más importantes y que generaron mayor oposición estaban la Ley Orgánica de Hidrocarburos (petróleo) y otras referidas a la banca, seguros, pesca, costas, tierras. Además Chávez ya había decretado la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (gas) en septiembre de 1999, y se modificó la ley del trabajo. En general todas estas leyes fueron rechazadas por los grandes grupos económicos nacionales y por la burguesía transnacional, a la vez que los medios de comunicación lograron establecer una matriz de opinión favorable hacia los afectados, logrando cohesionar a la oposición junto a las organizaciones sociales de sectores medios y altos y a la tecnocracia petrolera. Hay que aclarar que el gobierno también contribuyó sustancialmente a este proceso de rechazo a través de un conjunto de errores políticos y acciones claramente autoritarias en los ámbitos educativos, sindical y político, que lo confrontaron con distintos sectores sociales y elites tradicionales de la iglesia, sindicalismo y con sectores y partidos que habían sido sus aliados al comienzo del gobierno. Además, no hubo apoyo ni cohesión alrededor de estas leyes, pues los seguidores del gobierno tampoco tuvieron una información clara sobre sus ventajas para el país y para ellos mismos.

La legislación en relación al petróleo era particularmente importante. La apertura petrolera de los noventa había llevado a una progresiva autonomización de la operadora petrolera PDVSA del control del Estado, llegando al punto de marcar la política petrolera del país más allá de los intereses del mismo. Dos afirmaciones usadas por distintos expertos petroleros y por el mismo presidente Chávez poco después de ganar las elecciones dan cuenta de esta situación: *PDVSA, un Estado dentro del Estado* y *PDVSA Caja Negra*, en clara alusión a su independencia para formular políticas y para manejar los extraordinarios fondos producto de la venta de petróleo. Para revertir esta política de apertura petrolera el gobierno dictó esas dos leyes fundamentales: gas (1999) y petróleo (2001), que reordenaron el sector y dejaron sin vigencia las anteriores leyes y disposiciones al respecto (Rodríguez Araque, 2002).

Con estas leyes se busca recuperar el papel central del Ministerio de Energía y Minas en la rectoría, diseño e implementación de las políticas públicas para el sector; mejorar los ingresos fiscales provenientes del petróleo y privilegiar las regalías sobre los impuestos a las ganancias. Además, se apunta a fortalecer a la OPEP como eje clave de la inserción global de Venezuela, se cierran las puertas a las posibilidades directas o indirectas de privatización de la actividad petrolera, se establece que el Estado será accionista mayoritario en las asociaciones con

¹⁶ Para un detalle de las leyes, ver <<http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/busqueda-leyes.asp>>.

empresas privadas y se promueve el desarrollo de empresas petroleras privadas nacionales (Lander, 2002; Mommer, 2002). Frente al paradigma de *petróleo e inserción global* que predominó con la apertura petrolera, se pasa al de *petróleo y desarrollo nacional* (Cariola y Lacabana, 2005a). Es decir, la reforma petrolera del actual gobierno es una de las principales causas del conflicto sociopolítico, dado que intenta fortalecer los intereses de aquella parte de la sociedad que no forma parte del sector petrolero (Lander L., 2004).

Los sectores privados nacionales ligados a la actividad petrolera consideran que la política petrolera venezolana es nacionalista (no proteccionista), pues le da prioridad a las empresas venezolanas y trata de fortalecer la economía del país y mejorar la calidad de vida (Viergutz, 2002, ex presidente de la Cámara Petrolera Venezolana). Además, la nueva legislación ofrece oportunidades a todos los actores: al Estado como propietario del recurso natural, a la empresa operadora nacional, a los inversionistas privados nacionales y extranjeros (Mommer, 2002). Esto lo confirma la participación de las empresas nacionales y transnacionales en las oportunidades que ha abierto el gobierno venezolano en el sector. Ello no quiere decir que no hayan participado en las distintas actividades insurreccionales en contra de Chávez, dado que si bien encuentran oportunidades en este nuevo modelo de desarrollo, también es cierto que los ritmos de acumulación que el nuevo marco regulatorio les impone son más lentos que con un modelo de apertura y privatización.

Al cambio del marco regulatorio petrolero se suman otros elementos que también contribuyen a explicar por qué la tecnocracia petrolera asumió una posición tan radical contra el gobierno de Chávez que la llevó a sumarse explícitamente al golpe de Estado de abril de 2002 y a liderar el paro insurreccional petrolero para sacar al presidente en diciembre del mismo año. Esta tecnocracia, y en general los técnicos, profesionales y trabajadores de PDVSA con una visión meritocrática, pertenecen a los sectores medios y altos de la sociedad con remuneraciones y beneficios que excedían largamente a los de cualquier trabajador de otros sectores económicos, y su imaginario social y de consumo está ligado a los patrones globales, por lo cual no estaban dispuestos a compartir un proyecto petrolero y de país que significara reducir prebendas, privilegios y cuotas de poder de un grupo social que, a su vez, se había transformado en un imaginario de poder y progreso en la sociedad venezolana¹⁷. Esta conjunción de sectores medios y altos

17 Como parte de su política de cambiar las relaciones en el sector petrolero, PDVSA realizó durante los años noventa un manejo mediático muy intenso y preciso para imponer y, en definitiva, convencer a la opinión pública de que sus visiones eran las más convenientes para el país.

opositores llevará a estos a definirse como sociedad civil en contraposición a las hordas chavistas, en una clara expresión de que la armonía en la sociedad venezolana no sólo había sido una ilusión (Naím y Piñango, 1984) sino que definitivamente se había muerto (Piñango, 2003), dando paso a la visualización del conflicto de clase con un componente racial importante. Es decir, la pluralidad y heterogeneidad propias de la sociedad civil no están presentes. Por ello:

en la coyuntura venezolana actual no se trata sólo de heterogeneidad sino de antagonismo entre bloques diferenciados, entre los cuales se pretende situar una franja de “no alineados”. Es por eso que no se puede hablar de “la” sociedad civil en Venezuela, sino de una diversidad de actores y gremios cuya identidad gira cada vez más alrededor del gran conflicto hegemónico que se plantea la sociedad venezolana (Gómez, 2005: 341).

El antagonismo llevó a un ciclo insurreccional que incluyó el paro de 2001, el golpe de Estado de 2002, el paro petrolero de 2002-2003, la *guarimba* en 2003, atentados a embajadas, etcétera. Los actores fundamentales de este ciclo fueron: Fedecámaras, la organización empresarial que agrupa a los grandes y medianos empresarios, cuyo máximo líder se nombraría presidente *de facto* durante las casi 48 hs en que el presidente Chávez fue destituido el 11 de abril de 2002; la CTV, que también participó activamente de la insurrección y cuyo secretario general tuvo un papel protagónico en los paros y las acciones que llevaron al golpe. Asimismo, partidos políticos tradicionales y emergentes con participación decisiva en el golpe, que en algunos casos llegaron a tener ministros en el gobierno *de facto*, como Primero Justicia (pequeño partido de centroderecha con protagonismo y poder en Caracas), y también un conjunto de organizaciones sociales de sectores medios y altos que fueron participes activos, grupos ligados a la tecnocracia petrolera (que constituyeron la organización Gente del Petróleo), militares disidentes (que tomaron la céntrica plaza de Altamira en el corazón del distrito de negocios) y la jerarquía de la iglesia católica. Si bien la organización que los agrupaba, la Coordinadora Democrática, tuvo un rol fundamental, no puede dejar de nombrarse a los medios privados de comunicación como el elemento que le dio cohesión a estas acciones de la oposición (López Maya, 2004). De hecho, un ministro del gobierno de Chávez dijo en su momento: “sin la televisión la oposición no es nada”. Todos ellos fueron participes del breve intento de gobierno *de facto* que mostró su clara vocación antidemocrática y antipopular derogando la Constitución de 1999, los poderes constituidos, eliminando la reforma petrolera y los incrementos salariales, y desatando la persecución policial a personeros y simpatizantes del gobierno de Chávez. Esta batalla en la lucha hegemónica no logró consolidar en el poder a estos grupos,

pues con la reacción popular y de un grupo de militares leales a Chávez, este retornó triunfalmente al gobierno.

Fracasado el intento de golpe de Estado, el ciclo insurreccional tendría todavía varios eventos importantes y decisivos. Si bien la derrota sufrida por la oposición fue muy grande, el poder de los medios de comunicación y el control que la tecnocracia petrolera todavía tenía sobre PDVSA les permitió organizar sistemáticamente y llevar a cabo el paro-sabotaje petrolero iniciado en diciembre de 2002, en el entendido de que si se para PDVSA el país no aguanta y Chávez tiene que salir. El gobierno, los trabajadores de bajo rango de la industria petrolera, así como algunos pocos gerentes activos, otros jubilados y profesionales de las universidades y otros sectores afectos al gobierno junto con las organizaciones populares lograron pacientemente poner a funcionar la industria, con lo cual el paro se fue diluyendo sin que ninguno de los actores promotores del mismo lo diera por terminado o asumiera su derrota, sino más bien traspasándose responsabilidades por ese nuevo fracaso.

La estrategia de sacar a Chávez a como dé lugar sin importar los costos para el país y su gente fracasó rotundamente. Los costos objetivos y subjetivos de este paro fueron inmensos y el país lo pagó con una caída de más del 20% del PIB en el primer trimestre de 2003, el cierre de un gran número de empresas privadas –especialmente medianas y pequeñas–, un incremento del desempleo del 15% al 20%, el despido de 18 mil trabajadores de la industria petrolera de un total de 40 mil y una sociedad totalmente polarizada: en este proceso, las bases de la oposición se habían debilitado (López Maya, 2004). Es así como la lucha hegemónica va transformando a los actores y constituyéndolos en la medida en que construyen su proyecto sociopolítico (López Maya, 2003) y, sin duda, los actores del nuevo modelo se han ido fortaleciendo paulatinamente y logrando consolidar avances en la construcción del nuevo proyecto nacional.

LA NUEVA ESTRATEGIA PARA CONSOLIDAR LA HEGEMONÍA DEL PROYECTO NACIONAL

Fracasado el paro o sabotaje petrolero con las consecuencias negativas para el país ya señaladas, y ante la incertidumbre de tener que confrontarse en un referéndum presidencial, el gobierno diseña una nueva estrategia para implementar un conjunto de medidas de corte claramente distributivo favorables a los sectores populares que respondían a los objetivos de participación democrática e inclusión social que estaban en la base del proceso de transformaciones en marcha. Con un continuo incremento de los ingresos petroleros como telón de fondo, en alguna medida consecuencia de las políticas petroleras del gobierno –fortalecimiento de la OPEP, fijación de bandas, alianzas con países productores

independientes como México, Noruega y Rusia, etc.– la respuesta del gobierno fue acertada en su objetivo de acumular fuerza y apoyo para la confrontación política. Así fue que optó por políticas públicas emergentes que se implementan bajo el nombre genérico de misiones y que permiten dejar a un lado la burocracia de los ministerios.

Estas misiones, en tanto nuevas políticas públicas destinadas a implementar las políticas sociales en los ámbitos rural y urbano de todo el país, son iniciativas de gran amplitud social y territorial que aspiran a superar las trabas burocráticas de la estructura ministerial tradicional con el fin de contribuir a la ruptura de la exclusión social y a la construcción de ciudadanía. Entre otras, se destacan las misiones educativas (Misiones Robinson, Ribas y Sucre), que cubren desde la alfabetización y educación básica para las personas que no habían alcanzado ese nivel, hasta la educación superior para los bachilleres sin cupo universitario; la misión de salud (Barrio Adentro), orientada a fortalecer la red primaria en las comunidades populares; y la misión alimenticia (Mercal), una red de establecimientos tipo supermercados, más mercados populares en las calles y bodegas populares en los sectores más segregados territorial y socialmente, que venden alimentos con precios preferenciales y que contribuyen decididamente a mejorar el consumo de estos sectores de la población¹⁸. El complemento vendrá dado por la creación de demanda efectiva a través de un amplio mecanismo de distribución directa de la renta petrolera por la vía de un gran número de modalidades de becas y de medidas de aumento del salario real (Cariola y Lacabana, 2005a). El carácter innovador de estas políticas sociales y su capacidad para cumplir las metas propuestas ha despertado el interés por conocerlas de organismos internacionales y países de la región¹⁹.

Al contrario del diseño de las políticas públicas de la década del noventa, que fueron fuertemente regresivas con consecuencias negativas en términos objetivos (concentración del ingreso, continuidad de la deslegitimación del sistema político) y subjetivos (ruptura de los lazos de solidaridad social, de los imaginarios de progreso, la autoconfianza y la seguridad), estas políticas emergentes responden a la necesidad de apuntalar a los sujetos sociales del nuevo bloque en el poder: los sectores populares.

Durante 2004, fracasada la vía insurreccional, la oposición activa un conjunto de acciones para ir a un proceso de referéndum, tal como

18 Otras misiones, ver <<http://www.gobiernoonline.gob.ve/miscelaneas/misiones.html>>.

19 Como casos emblemáticos pueden nombrarse los de la educación y el agua potable. En el primero, la UNESCO declaró a Venezuela territorio libre de analfabetismo, mientras que en agua potable, gracias a las nuevas formas de participación popular en la provisión del servicio, se alcanzó la Meta del Milenio de reducir a la mitad la población sin acceso al agua con diez años de anticipación.

lo establece la CRBV, para decidir la permanencia o salida del presidente. Este proceso estuvo plagado de obstáculos y acciones de distinto tipo por parte de ambos bandos, algunas claramente antidemocráticas, y convocó a la OEA y al Centro Carter como garantes aun cuando la oposición no tenía confianza en ellos. Si bien la oposición estaba convencida de su triunfo, el resultado fue la reafirmación del presidente en su cargo en agosto de 2004 con el 58% de los votos. El efecto de arrastre se notará en las elecciones regionales de octubre, donde el oficialismo saldrá totalmente fortalecido. Las misiones y otras medidas que contribuyeron a reafirmar en los sectores populares el imaginario de inclusión a través de su incorporación a la toma de decisiones políticas, particularmente por la vía de las distintas formas de participación popular y la mejora de su calidad de vida, sumadas a la progresiva recuperación de la industria petrolera y de la economía general en 2004, consolidaron el apoyo político al presidente Chávez.

A lo largo de este período, el comportamiento de la economía ha sido errático, tanto por el arrastre de los resultados de la gestión anterior a Chávez, por la gran desconfianza que el presidente y su discurso generan entre los sectores dominantes y parte de los sectores medios y altos, así como por las consecuencias económicas de los eventos insurreccionales que se sucedieron entre 2001 y 2003. La acumulación de estos sucesos sociopolíticos apuntaba a las bases de la actividad económica, que se vio seriamente afectada con consecuencias negativas no sólo en el ciclo coyuntural, sino también en la dinámica de mediano plazo en virtud de la destrucción de parte de la capacidad de producción de la economía venezolana. Se estima que el paro empresarial tuvo un costo de 3.500 millones de dólares, mientras que el paro petrolero tuvo un costo directo que superó los 10 mil millones de dólares. En 2002 y en 2003 se asiste a una caída del PIB, al retorno de la inflación e incremento del desempleo, mientras que en 2004 y 2005, una vez revertidos los negativos efectos de los sucesos sociopolíticos, el PIB se recupera, bajan la inflación y el desempleo, en el marco de un fuerte incremento de los precios petroleros y de la disponibilidad de ingresos fiscales para impulsar la demanda²⁰.

20 En 2002 y 2003 el PIB se desploma en un 8,9% y un 7,7%, respectivamente. Al mismo tiempo, la contracción se ve acompañada del retorno de elevados niveles de inflación, 31,2% y 27,1% respectivamente, e incremento del desempleo por sobre el 20% dejando atrás los logros del control inflacionario y la mejora de la ocupación y del salario real alcanzados durante el trienio 1999-2001. Durante 2004 y lo que va de 2005, se sostiene una fase de recuperación del crecimiento económico. El PIB creció en 2004 a una tasa del 17,3%, resaltando el aporte del sector privado no petrolero (18,8%). Se destacan dos reflexiones de tales resultados. Por un lado, sorprende esta fuerte recuperación, dadas las condiciones en que fue afectado el aparato productivo y, por otro, a pesar de ser la tasa

Lo importante del crecimiento de la economía es que va acompañado de una mejora importante de los dos motores de la demanda agregada, la inversión y, especialmente, el consumo privado. Es indudable que esta expansión le debe gran parte de su dinamismo a la permanente alza de los precios petroleros. El aspecto más notorio es que la economía disminuyó el trasvase de parte de estos recursos extraordinarios hacia el exterior, y una parte importante de ellos se reorientó hacia la economía interna, impulsando el consumo a través de una masiva transferencia de ingresos hacia las familias, especialmente las más pobres.

Como parte de su estrategia de consolidar la hegemonía del nuevo modelo de desarrollo, el gobierno, además de las misiones, ha implementado a través de distintos organismos públicos, principalmente financieros, una serie de políticas públicas destinadas a los sectores populares y a los pequeños y medianos empresarios. Se crea el Banco del Pueblo para otorgar microcréditos para emprendimientos individuales y el Banco de la Mujer al reconocer el fenómeno de feminización de la pobreza y para compensar la discriminación de género. Se impulsa la economía social con la creación del Ministerio de la Economía Popular, el desarrollo de cooperativas y el desarrollo endógeno como vías complementarias para el desarrollo económico y social. El impulso al sector de economía social es sin duda uno de los pilares del Estado distribucionista con vocación productiva. Impulsa simultáneamente la formación de los sectores excluidos de la educación formal y/o técnica (Misión Vuelvan caras) y del mercado de trabajo, a la vez que financia una amplia red de emprendimientos en todos los sectores económicos, en general de tamaño pequeño, que contribuyen significativamente a la disminución del desempleo²¹.

Paralelamente se impulsa la pequeña y mediana industria a través de financiamientos preferenciales y masivos, del comercio nacional, de las rondas de negocios de PyMEs y cooperativas con las empresas públicas. En la medida en que la economía se ha recuperado a partir de 2004, estos grupos pueden considerarse aliados del gobierno, y

más alta registrada desde que se mide el PIB, este nivel de actividad económica apenas logra alcanzar al de 2001. El incremento de los precios del petróleo permitió la recuperación de las reservas internacionales, que en 2005 llegaron a superar los 30 mil millones de dólares. Obviamente, la balanza de pagos tuvo saldos positivos y el riesgo país disminuyó por debajo de 500 puntos básicos. Los primeros resultados de 2005 permiten pronosticar un crecimiento para final del año que puede estar por encima del 8%, y una inflación del 15%, mientras se espera que la economía crezca al 6% en 2006 (Giordani, 2004; Parra Luzardo, 2005).

21 La categoría *membros de cooperativas* ha pasado en seis años de menos del 1% a casi el 9% del total de ocupados. Estas experiencias no han sido exitosas en su totalidad, y en muchos casos se han prestado para distintas formas de fraude laboral.

su representación gremial, Fedeindustria (Federación de pequeños y medianos industriales), así lo expresa. Paralelamente, el gobierno ha dado su apoyo a nuevas asociaciones empresariales que se identifican con el proyecto de transformaciones en marcha, que en general agrupan empresarios individuales y pequeñas o medianas empresas del campo y la ciudad en lo que algunos autores llaman nuevo corporativismo estatal (Arenas, 2005). Es más, la base de Fedecámaras le exigió a su directiva abandonar la confrontación política, pues ellos necesitan incorporarse a las agendas económicas del gobierno para poder producir. Al respecto no debe olvidarse que la directiva de Fedecámaras representa a los grandes grupos económicos que pudieron soportar las consecuencias de los sucesos de 2001 a 2003 y recuperar más rápidamente su nivel de actividad. Esta situación es especialmente evidente en el sector bancario y en el sector monopólico productor de alimentos.

Un aspecto fundamental de la estrategia del gobierno es la intención de desarrollar una política de producción de alimentos con base en un criterio de soberanía nacional, que lo lleva a impulsar la incorporación de tierras a la producción y a asumir el conflicto derivado de la propiedad de la misma con los sectores dominantes, pues buena parte de los grandes establecimientos y latifundios privados ocupan tierras públicas que fueron apropiadas de hecho a lo largo de los años. Sin duda este conflicto tiene un gran peso ideológico, pues potencialmente afecta la propiedad de la tierra si bien aún no se han realizado expropiaciones masivas sino sólo algunas tomas de posesión emblemáticas, justamente de tierras que se consideran propiedad del Estado. La estrategia agrícola considera diversos mecanismos de incorporación de la población a estas actividades. Aunque existen opciones individuales, las más promovidas son las diferentes formas de asociación colectiva. Esta política ha tenido no sólo respuestas mediáticas y económicas sino que las muertes violentas (sicariato) de dirigentes campesinos de base se han incrementado en los últimos años.

Como parte de una visión desarrollista se crean los Ministerios de Industrias ligeras y de Industrias básicas en forma separada, y se inicia una política de reindustrialización con base en industrias tradicionales y encadenamientos productivos internos como parte de las alianzas con la fracción no dominante de la burguesía nacional. Además, se continúa con la política de alianzas con el capital extranjero en el sector petrolero y petroquímico, así como con una agresiva política de formación de asociaciones petroleras con países del Caribe (Petrocaribe) y América del Sur (Petrosur). La asociación al MERCOSUR es un punto fundamental de la estrategia internacional, pero genera conflictos con los empresarios nacionales que alegan no haber sido consultados sobre

este acuerdo y temen que los efectos resulten negativos para ellos, dado que tendrían que competir en un mercado más amplio.

En cierta forma, puede decirse que se asiste a una expulsión de los organismos corporativos tradicionales de los empresarios del Estado, ya que estos no tienen el poder que anteriormente tenían para fijar políticas económicas sectoriales. Sin embargo, durante 2005 se comienza a percibir un reacomodo de los sectores empresariales buscando negociar con el gobierno desde una posición gremial y dejando de lado la oposición política abierta. La institucionalización del conflicto sociopolítico y el crecimiento de la economía han permitido reconstituir algunas alianzas tácticas con fracciones del capital, sin que ello signifique que estas, al menos las fracciones más concentradas del capital, no continúen oponiéndose por diferentes vías a la implementación del nuevo modelo. Si bien lo corporativo y lo político difieren coyunturalmente, es de esperar que los conflictos por el predominio económico se expresen en la lucha hegemónica.

En referencia a este reacomodo, citemos tres ejemplos recientes: el nuevo presidente de Consec Comercio, que representa a la burguesía comercial importadora, declaraba: "... debemos intensificar el diálogo con el Gobierno, como actor fundamental de la sociedad... las bases están cansadas de una constante problemática política y por ello ese diálogo debe estar orientado a reconocernos y construir sobre las diferencias". A su vez, José Luis Betancourt, ex presidente de Fedenaga (gremio de los ganaderos), actual presidente de Fedecámaras y uno de los opositores más frontales a Chávez desde el inicio de su gobierno, declaraba: "... los empresarios tienen un papel fundamental en el debate nacional, desde el punto de vista social, ideológico, económico y político y si se han cometido errores, estamos dispuestos a reconocerlos y rectificar [...] El sector privado está presentando propuestas muy importantes para lograr el necesario entendimiento... entre los poderes públicos y los representantes sociales y económicos" (*El Universal*, 2005: 2-4). Por su parte, el nuevo presidente de Fedenaga, Genaro Méndez, declaraba: "hay que dejar atrás muchas situaciones que nos tuvieron enfrentados al Gobierno y debemos mirar hacia el futuro pensando en la solución de los problemas agropecuarios del país" (*El Universal*, 2005: 2-4).

Ahora bien, este reacomodo de los sectores que en muchos casos son los productores y/o distribuidores de bienes salario se da en un contexto donde el nuevo Estado impulsa una política distributiva de amplio alcance que incrementa la demanda de estos bienes y que sin duda impulsa la acumulación de esos sectores de la burguesía, más allá de que los alimentos considerados esenciales tengan precio máximo. Por otra parte, los excedentes financieros en manos del gobierno van a terminar de una u otra forma en los bancos privados, nacionales

y transnacionales, generando ganancias extraordinarias para los mismos²². Paralelamente, el sector financiero ha tenido que aceptar, al igual que otros sectores económicos, un proceso de disciplinamiento a través de la regulación de las tasas de interés y comisiones que le permitían obtener altas ganancias sin realizar intermediación financiera.

El gobierno no sólo ha impuesto controles de precios que tienden a regular la ganancia empresarial, sino que lleva adelante una política impositiva como nunca se había visto anteriormente en Venezuela. Esta política, si bien apunta a los mayores contribuyentes tanto en la evasión del impuesto sobre la renta (ganancias) como del impuesto al valor agregado (IVA), tiene por otro lado aspectos regresivos como el mismo IVA o el débito bancario. En términos impositivos, quizás lo más emblemático ha sido la fiscalización y cálculo de la evasión impositiva (alrededor de 4.000 millones de dólares) de las empresas petroleras transnacionales que operan en el país como consecuencia de la anterior política de apertura petrolera. Si bien el gobierno ha seguido con las asociaciones con el capital transnacional petrolero, estas se basan en la nueva política nacionalista petrolera que impone una serie de condiciones más favorables al Estado pero que no han sido obstáculos para que las empresas extranjeras acepten las asociaciones. A su vez, se ajustaron las regalías hacia arriba, mejorando el ingreso fiscal, y se dejaron de lado operaciones que si bien daban ganancias a los socios transnacionales, tenían un ínfimo o nulo aporte al fisco nacional. Obviamente, el alto nivel de los precios petroleros permite de todas formas altas ganancias, aun en el marco de estas políticas nacionalistas.

La política de reindustrialización impulsa en un primer momento la recuperación de industrias que sufrieron las consecuencias negativas de la apertura económica de los noventa y dejaron de producir y en segundo lugar la diversificación productiva con base en la internalización del petróleo (Petróleo y Desarrollo nacional). En esta primera etapa, el presidente Chávez ha llamado a todos los empresarios que hayan sido afectados por las políticas neoliberales a presentarse para plantear asociaciones con el gobierno para poner nuevamente en producción sus empresas bajo un régimen de cogestión con los trabajadores. En este sentido se visualiza un sector de la burguesía que no pertenece a la fracción dominante tradicional que se transforma en aliado del proyecto de transformaciones en marcha. Obviamente hay muchas dudas acerca de la viabilidad económica y tecnológica de algunas de estas empresas

22 Trino Alcides Díaz, superintendente de bancos, declaró que el Estado mantiene en fideicomisos y depósitos oficiales en la banca privada unos 50 billones de bolívares, de los cuales 20 han estado inmovilizados durante buen tiempo, permitiendo así a las instituciones ganar intereses por ese dinero (*Últimas Noticias*, 2005: 23).

que han estado cerradas mucho tiempo y que necesitan financiamiento público y protección externa. Esta ya ha empezado a generar conflictos con importadores e industriales que utilizan materia prima importada que, en ciertos casos, es más barata que la nacional.

Frente a esta situación de adaptación de los sectores empresariales a la agenda económica del gobierno, algunos intelectuales de la oposición han salido a criticar esta alianza, no sólo porque incrementa la dependencia de las grandes empresas y bancos privados con el Estado sino por las consecuencias negativas que para la oposición política tiene la recuperación económica²³.

Ahora bien, este proceso de transformaciones no está exento de contradicciones internas derivadas de visiones económicas y posiciones políticas diferenciadas. El Estado es el campo donde se condensan estas contradicciones y donde se expresan los intereses encontrados de los distintos sectores de la sociedad venezolana en un modelo estado-céntrico que deriva su legitimidad del proyecto nacional apoyado por los sectores populares. Si bien el Estado tiene todavía la rémora de los modelos anteriores, en esta fase las políticas emergentes le dan un contenido diferente que acerca su acción a los principios de la democracia participativa. Al respecto hay que considerar que las propuestas de participación se mueven entre la colonización de la sociedad por el Estado y la organización independiente de los sectores populares (Lander, E., 2004; Cariola y Lacabana, 2005a). En este punto se abre otro interrogante: cuál es la correspondencia o, mejor dicho, la falta de correspondencia de un conjunto de instituciones que están ligadas a la democracia representativa no sólo frente a los postulados de la democracia participativa sino a la emergencia de formas organizativas que tienen su base en este principio y que cuestionan tanto la permanencia de esas instituciones como las prácticas de los partidos en el gobierno para seleccionar sus candidatos. Estas prácticas siguieron siendo las mismas que utilizaron los partidos tradicionales y se especula que tuvieron un impacto negativo en la decisión de no participar en las recientes elecciones (05-12-2005) de diputados a la Asamblea Nacional. La abstención del 75% del electorado en el marco del retiro de todos los candidatos de la oposición pone al oficialismo en una situación delicada y abre

23 "Hay empresarios, sobre todo los nuevos; pero, también algunos de los viejos, que creen que ya todo pasó; que llegó la calma y, con ella, la sensatez. Ahora todos a ganar dinero, porque Chávez, al final, como Dios, aprieta, pero no ahoga. Esto permite a algunos manganzones deslizarse suavemente en la corte imperial, reconociéndole a 'Hugo' que en medio de sus exageraciones, deja hacer [...] Lo lamentable es que algunos otros, bien establecidos y con cierto prestigio, hayan entrado en el juego. Desde luego, no se trata de pedirles que quiebren una lanza en la lucha política; pero, tampoco tienen necesidad alguna de involucrarse en la francachela oficial" (Blanco, 2005).

interrogantes importantes, no ya sobre la cantidad del apoyo, que en el caso del presidente Chávez parece indiscutible, sino sobre la calidad del mismo. Este conjunto de elementos abre otro doble interrogante: ¿estos años han contribuido realmente a consolidar una organización independiente que reivindica su capacidad de participar directamente en las decisiones? Y, ¿la dirigencia y el gobierno no han logrado salir de las viejas prácticas clientelares y autoritarias?

Otro aspecto a tomar en cuenta es el carácter desarrollista o no del Estado²⁴. A todas luces el Estado venezolano actual es un Estado distribucionista que apunta a articular el aumento del consumo de los sectores populares con un fuerte impulso a las industrias tradicionales, pero no se aprecia una política industrial orientada hacia el sector externo que permita hablar de una política desarrollista al estilo de los estados populistas de los años cuarenta y cincuenta (Argentina, Brasil). Más aún, esta diferencia se amplía cuando se toma en consideración que hay un intento de cambio de relaciones de producción, y si bien no hay una definición clara, el presidente Chávez ha comenzado a hablar de la construcción del socialismo del siglo XXI. En este contexto se impulsan las empresas de producción social, dos de cuyas características fundamentales son la autogestión de los trabajadores desde una óptica de que el poder de planificar y gestionar no debe enajenarse en el saber de gerentes y técnicos sino estar en manos de los mismos, y la igualdad de remuneraciones más allá del tipo de trabajo²⁵. Sin duda, esta opción pone en el tapete el dilema distribución-acumulación. En este primer momento, el mismo se inclina hacia la distribución, pero es necesario pensar sobre la sostenibilidad de la misma si no se contribuye simultáneamente a la acumulación para que las condiciones del desarrollo sean impuestas desde dentro hacia fuera y no depender del exterior. “Si uno quiere decir desarrollo endógeno, quiere decir ‘desde dentro’ el país sea capaz de generar las condiciones de desarrollo y no depender de cuál sea la demanda externa” (Sunkel, 2005: 6).

Ahora bien, si en el proceso de lucha hegemónica se ha ido consolidando un bloque en el poder bajo la hegemonía de los sectores populares, se puede considerar que estamos ante un Estado democráti-

24 Agradezco a Enrique Arceo, quien fomentó esta reflexión con sus comentarios a la primera versión de este artículo.

25 En la actualidad hay una amplia discusión acerca de la transición productiva al socialismo del siglo XXI, donde entre otras cosas se discute: la permanencia de remuneraciones diferenciales para el trabajo complejo dentro de las empresas de producción social (EPS); la relación e interdependencia de estas EPS con las empresas privadas; y su relación y posible dependencia del Estado y/o las empresas del Estado. Al respecto, no es menor la consideración acerca de dónde está el énfasis del proceso de transformaciones en marcha: en los sujetos sociales o en el Estado.

co popular que internamente tiende a profundizar ese cambio en las relaciones de producción y en lo externo apunta a nuevas formas de inserción no sólo en el mercado mundial sino en la estructura de poder mundial. La legitimidad de este nuevo Estado democrático-popular nace del proyecto nacional inclusivo y del apoyo de los sectores populares, pues la burguesía nacional está muy debilitada como para asumir esa tarea histórica. “El nuevo bloque deberá afrontar la difícil tarea de compatibilizar las exigencias de la acumulación con la equidad a fin de hacer posible la paulatina incorporación de las formas más avanzadas del desarrollo de las fuerzas productivas y una disminución radical de la desigualdad” (Arceo, 2005: 33).

Para finalizar y retomando algunos interrogantes del documento inicial del Grupo CLACSO sobre Sectores Dominantes en América Latina, la coyuntura actual en Venezuela puede sintetizarse como sigue.

Se está en presencia de un Estado democrático popular, con una base distribucionista y aspiraciones desarrollistas, que se construye con la visión de un proyecto nacional que está plasmado en la nueva Constitución y que se opone a los postulados neoliberales.

El apoyo fundamental para este proyecto proviene de los sectores populares, para los cuales en la Venezuela actual hay una recomposición del imaginario colectivo, del *nosotros*, de lo nacional y de un imaginario democrático y de integración social.

En estos años se asiste a un recambio de elites, especialmente en el nivel político y, paralelamente, los sectores dominantes han tenido que ceder parte de su hegemonía política y adaptarse a los ritmos de acumulación que impone el proyecto en marcha, en lo que puede considerarse el disciplinamiento de la burguesía por los sectores populares que participan en la construcción del nuevo proyecto nacional y lo defienden en la calle. El retorno de Chávez al gobierno después del golpe de Estado de abril de 2002 de la mano de la movilización popular y el fracaso del paro petrolero son indicios claros de esta defensa del proyecto nacional.

Los viejos intelectuales orgánicos de los sectores dominantes no han logrado articular una estrategia política y la oposición al nuevo proyecto nacional no logra estructurarse, mientras surge una nueva alternativa orgánica con viejos y nuevos intelectuales del campo popular y el *pueblo* como protagonista. De hecho, los viejos partidos políticos han perdido ascendencia sobre la población, se encuentran deslegitimados y no sólo no pueden recuperar su protagonismo en la política sino que, en algunos casos, tienden a desaparecer, mientras los nuevos partidos de centroderecha sólo logran convocar con eficacia a parte de los electores de sectores medios y altos, en Caracas fundamentalmente. Sin embargo, es cada vez más evidente la conformación de un bloque de derecha en el que participan empresarios e intelectuales, que si bien

no tienen poder de convocatoria sí tienen una amplia cobertura mediática que apela a una retórica del pasado para diferenciarse del proyecto de cambios en marcha.

Aunque se ha conformado un nuevo bloque histórico, la lucha hegemónica continúa y no se ha consolidado una nueva hegemonía. En este sentido, más allá de los esfuerzos de palabra, pareciera que el nuevo bloque en el poder también tiende a la exclusión de algunos sectores sociales potencialmente aliados del proyecto nacional, específicamente sectores medios. Si bien el plano estratégico está muy claro, no puede decirse lo mismo del nivel táctico y de acción, aun cuando se deben reconocer cambios sustanciales con las misiones como políticas sociales emergentes y en el ejercicio de la democracia directa en las comunidades.

Se intenta un nuevo sendero de acumulación con base en el petróleo y sustentado en los altos precios del mismo, aunque no está claro cómo seguirá en el futuro. Se están desarrollando nuevos sectores de burguesía nacional, a la vez que se impulsa el sector de economía social de micro y pequeñas empresas y cooperativas junto con las empresas de producción social autogestionadas por los trabajadores. Los cambios no se centran solamente en el papel del petróleo como factor de desarrollo social y socio-territorial sino también en el impulso a la participación comunitaria y ciudadana que está incidiendo en la recomposición de los tejidos sociales y socio-territoriales, así como en la construcción de nuevas relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

El reto de la construcción de estrategias alternativas, de un modelo de desarrollo alternativo, no sólo exige un desafío teórico sino un compromiso político y participativo con un proceso de cambios en construcción. Implica también tener claras las oportunidades, los límites, los errores que el mismo genera, así como la necesidad de interpelar permanentemente al Estado y a la nueva clase política desde los postulados de la democracia participativa en los cuales ese modelo se asienta. Construir un nuevo Estado que impulse la socialización del poder político en una sociedad abierta y deliberativa es, sin duda, un reto importante para el futuro.

BIBLIOGRAFÍA

- Arceo, Enrique 2005 "El impacto de la globalización en la periferia y las nuevas y viejas formas de la dependencia en América Latina" en *Revista Cuadernos del Cendes* (Caracas) N° 60.
- Arenas, Nelly 2005 "¿Languidece el corporativismo? De FEDECAMARAS a los nuevos actores empresariales en Venezuela" en *CENDES*

- Venezuela Visión Plural. Una mirada desde el Cendes* (Caracas: Bid & co./CENDES/UCV).
- Baptista, Asdrúbal 2004 *El relevo del capitalismo rentístico. Hacia un nuevo balance de poder* (Caracas: Fundación Polar).
- Baptista, Asdrúbal y Mommer, Bernard 1987 *El petróleo en el pensamiento económico venezolano. Un ensayo* (Caracas: IESA).
- Baptista, Asdrúbal y Mommer, Bernard 1989 “Renta petrolera y distribución factorial del ingreso” en Nissen, Hans-Peter y Mommer, Bernard *¿Adiós a la bonanza? Crisis de la distribución del ingreso en Venezuela* (Caracas: ILDIS-CENDES/Nueva Sociedad).
- Basualdo, Eduardo 2002 (2001) *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina* (Buenos Aires: UNQ-FLACSO-IDEP).
- Betancourt, José Luis 2005 “Hay disposición para reconocer errores” en *El Universal* (Caracas) Sección 2.
- Blanco, Carlos 2005 “La quimera de la prosperidad” en *El Universal. Tiempo de Palabra* (Caracas). Ver en Internet: <http://www.eluniversal.com/2005/05/22/opi_art_23188C.shtml>.
- Boeckh, Andreas 2003 “The painful transition of a rentier state. Globalization and neopopulist regression in Venezuela”, Universitat Tübingen. Available at: <http://www.uni-tuebingen.de/pol/painful_transition.pdf>.
- Buxton, Julia 2003 “Política económica y ascenso de Hugo Chávez al poder” en Ellner, Steve y Hellinger, Daniel (eds.) *La política venezolana en la época de Chávez. Clases, polarización y conflicto* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Cariola, Cecilia (coord.); Betancourt, Luisa; Fernández, Beatriz; Darwich, Gregorio; Gutiérrez, Ana y Lacabana, Miguel 1992 *Sobrevivir en la pobreza. El fin de una ilusión* (Caracas: CENDES/Nueva Sociedad).
- Cariola, Cecilia y Lacabana, Miguel 2003 “Globalización y desigualdades socio-territoriales: la expansión de la periferia metropolitana de Caracas” en *Eure* (Santiago de Chile) Vol. XXIX, N° 87.
- Cariola, Cecilia y Lacabana, Miguel 2005a “Los bordes de la esperanza: nuevas formas de participación popular y gobiernos locales en la periferia de Caracas” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) Vol. XI, N° 1.
- Cariola, Cecilia y Lacabana, Miguel 2005b “Globalización y metropolización. Tensiones, transiciones y cambios” en CENDES *Venezuela Visión Plural. Una mirada desde el Cendes* (Caracas: Bid & co./CENDES/UCV).
- Carvalho, Gastón 1991 “Una visión de coyuntura del sistema político venezolano” en *Revista Cuadernos del Cendes* (Caracas) N° 17/18.

- Carvalho, Gastón y Hernández, Josefina 1981 “Dominación burguesa y democracia representativa en Venezuela. Apuntes para la evaluación de su funcionamiento” en *Revista Mexicana de Sociología* (México) Vol. XLIII, N° 2.
- Carvalho, Gastón y López Maya, Margarita 1989 “Crisis en el sistema político venezolano” en *Revista Cuadernos del Cendes* (Caracas) N° 10.
- CLACSO 2004 “Sectores dominantes en América Latina”. Documento del Grupo de Trabajo Sectores Dominantes en América Latina, Buenos Aires, mimeo.
- Contreras, Miguel Ángel 2004 “Ciudadanía, Estado y democracia en la era neoliberal: dilemas y desafíos para la sociedad venezolana” en Mato, Daniel (coord.) *Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización* (Caracas: FACES-UCV).
- Córdova, Armando 1973 “Consideraciones acerca del tipo de desarrollo alcanzado por la economía venezolana” en Córdova, Armando y Silva Michelena, Héctor *Aspectos teóricos del subdesarrollo* (Caracas: UCV-FACES-División Publicaciones).
- Duarte, Rafael y Sierra, Rosaura 2004 “La disputa por el control de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El conflicto entre el estado venezolano y la elite gerencial petrolera (1998-2003)”. Ponencia presentada en el II Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, México, mimeo.
- Ellner, Steve 2003 “En la búsqueda de explicaciones” en Ellner, Steve y Hellinger, Daniel (eds.) *La política venezolana en la época de Chávez. Clases, polarización y conflicto* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Ellner, Steve 2004 “Hugo Chávez y Alberto Fujimori: análisis comparativo de dos variantes de populismo” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) Vol. 10, N° 1.
- Espinasa, Ramón 1997 “Evolución de la política petrolera nacional” en *Revista SIC* (Caracas) Año LX, N° 600.
- Espinasa, Ramón 2001 (1999) “El marco fiscal petrolero venezolano: evolución y propuestas” en Valecillos, Héctor y Bello, Omar *La economía contemporánea de Venezuela 1990-1999. Ensayos escogidos* (Caracas: BCV).
- Fontanals, Jorge 1981 “Capital financiero transnacional y expansión del Estado venezolano” en Estévez, Jaime y Lichtensztejn, Samuel *La nueva fase del capital financiero* (México: Nueva Imagen).
- Furtado, Celso 1957 “El desarrollo reciente de la economía venezolana”, CENDES, Caracas, mimeo.

- García-Guadilla, María Pilar y Roa Carrero, Ernesto 1997 *Sociedad civil, democracia liberal y economía de mercado: las organizaciones sociales liberales en Venezuela* (Guadalajara: Congreso LASA).
- Gil Yépez, José Antonio 1978 *El reto de las élites* (Caracas: Tecnos).
- Giordani, Jorge 2004 *Hacia una Venezuela Productiva* (Caracas: Ministerio de Planificación y Desarrollo-MPD).
- Gómez Calcaño, Luis 2005 “Actores y modelos de sociedad en la transición sociopolítica de Venezuela” en CENDES *Venezuela Visión Plural. Una mirada desde el Cendes* (Caracas: Bid & co./CENDES/UCV) Tomo I.
- Hidalgo, Manuel 2000 “Liderazgo político y reforma económica: el caso Venezuela 1989-1998” en *Zona Abierta* (Madrid) N° 90/91.
- Lacabana, Miguel 2001 (1999) “Impactos socioambientales de la nueva minería del oro en Venezuela” en Valecillos, Héctor y Bello, Omar *La economía contemporánea de Venezuela 1990-1999. Ensayos escogidos* (Caracas: BCV).
- Lacabana, Miguel y Cariola, Cecilia 2005 (forthcoming) “The Processes Underlying Caracas as a Globalizing City” in Amen, Mark; Archer, Kevin and Bosman, Martin (eds.) *Relocating Cities: From the Center to the Margins* (USA: Rowman and Littlefield).
- Laclau, Ernesto 2005 *La razón populista* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Lander, Edgardo 2004 “El campo político de fuerzas y alianzas. Actores, tensiones y poder” (Versión preliminar). Ponencia para el seminario nacional Política Social ¿Un nuevo paradigma?, Fundación Escuela de Gerencia Social, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Caracas, mimeo.
- Lander, Luis 2002 “La reforma petrolera del gobierno de Chávez” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) Vol. 8., N° 2.
- Lander, Luis 2004 “La insurrección de los gerentes: Pdvs y el gobierno de Chávez” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) Vol. 10, N° 2.
- López Maya, Margarita 2001 “Venezuela después del Caracazo: formas de la protesta en un contexto desinstitucionalizado”. University of Notre Dame, Hellen Kellogs Institute, Working Paper N° 287. Tomado de <<http://www.nd.edu/~kellogg/WPS/287.pdf>>.
- López Maya, Margarita 2003 “Hugo Chávez Frías: su movimiento y presidencia” en Ellner, Steve y Hellinger, Daniel (eds.) *La política venezolana en la época de Chávez. Clases, polarización y conflicto* (Caracas: Nueva Sociedad).

- López Maya, Margarita 2004 “Venezuela 2001-2004: actores y estrategias” en *Revista Cuadernos del Cendes* (Caracas) N° 56.
- López Maya, Margarita y Lander, Luis 2000 “Ajuste, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) Vol. 6, N° 3.
- Machado de Acedo, Clemy; Plaza, Elena y Pacheco, Emilio 1981 *Estado y grupos económicos en Venezuela. Su análisis a través de la tierra, construcción y banca* (Caracas: Ateneo de Caracas).
- Márquez, Patricia 2003 “Vacas flacas y odios gordos. La polarización en Venezuela” en Márquez, Patricia y Piñango, Ramón *En esta Venezuela. Realidades y nuevos caminos* (Caracas: IESA).
- Mato, Daniel 2005 “Redes de ‘think-tanks’, fundaciones, empresarios, dirigentes sociales, economistas, periodistas y otros profesionales en la promoción de ideas (neo)liberales a escala mundial” en Mato, Daniel (coord.) *Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización* (Caracas: FACES-UCV).
- Méndez, Genaro 2005 “Nuevo Presidente de Fedenaga” en *El Universal* (Caracas) Sección 2.
- Mommer, Bernard 1987 *La distribución de la renta petrolera. El desarrollo del capitalismo rentístico venezolano* (Caracas: ILDIS).
- Mommer, Bernard 1998 *La Cuestión Petrolera* (Caracas: APUCV-Tropykos).
- Mommer, Bernard 2001 (1999) “Venezuela, política y petróleos” en Valecillos, Héctor y Bello, Omar *La economía contemporánea de Venezuela 1990-1999. Ensayos escogidos* (Caracas: BCV).
- Mommer, Bernard 2002 “Venezuela: un nuevo marco legal e institucional petrolero” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) Vol. 8, N° 2.
- Mommer, Bernard 2003a “Petróleo subversivo” en Ellner, Steve y Hellinger, Daniel (eds.) *La política venezolana en la época de Chávez. Clases, polarización y conflicto* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Mommer, Bernard 2003b *Petróleo global y estado nacional* (Caracas: Comala.com).
- Mommer, Bernard 2004 “La valorización del crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) Vol. 10, N° 2.
- Naím, Moisés y Piñango, Ramón 1984 *El caso Venezuela. Una ilusión de armonía* (Caracas: IESA).
- Parker, Dick 2003 “¿Representa Chávez una alternativa al neoliberalismo?” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) Vol. 9, N° 3.

- Parra Luzardo, Gastón 2005 “Declaraciones de prensa” en *El Universal* 26-11-2005. Tomado de <http://buscador.eluniversal.com/2005/11/26/eco_art_26202E.shtml>.
- Patruyo, Thanalí 2005 “Los partidos políticos en la transición (1989-2004): de la desconsolidación a la antipolítica” en *CENDES Venezuela Visión Plural. Una mirada desde el Cendes* (Caracas: Bid & co./CENDES/UCV) Tomo I.
- Pérez Alfonso, Juan Pablo 1971 *Petróleo y dependencia* (Caracas: Síntesis Dos Mil).
- Piñango, Ramón 2003 “Muerte de la armonía” en Márquez, Patricia y Piñango, Ramón *En esta Venezuela. Realidades y nuevos caminos* (Caracas: IESA).
- Pirela, Arnoldo (ed.) 1996 *Cultura empresarial en Venezuela. La industria química y petroquímica* (Caracas: Fundación Polar/CENDES).
- Porta, Fernando; Lacabana, Miguel y Fajardo, Víctor 1983 *La internacionalización financiera en Venezuela* (Buenos Aires: IPAL-Centro de Economía Transnacional).
- Portantiero, Juan Carlos 1981 *Los usos de Gramsci* (México: Folios).
- Proceso Político 1976 “Reforma administrativa y V Plan de la Nación: instrumentos del sector emergente de la burguesía” en *Revista Proceso Político* (Caracas) N° 2.
- Pro-Venezuela 1974 *Pensamiento y Acción* (Caracas: Asociación Pro-Venezuela).
- Purroy, M. Ignacio 1986 *Estado e Industrialización en Venezuela* (Valencia: Vadell Hermanos).
- Purroy, M. Ignacio 1997 “Sesenta años en busca de diversificación” en *Revista SIC* (Caracas) Año LX, N° 600.
- Rangel, Domingo Alberto 1971 *La oligarquía del dinero* (Caracas: Fuentes).
- Roberts, Kenneth 2003 “Polarización social y resurgimiento del populismo en Venezuela” en *CENDES Venezuela Visión Plural. Una mirada desde el Cendes* (Caracas: Bid & co./CENDES/UCV) Tomo I.
- Rodríguez Araque, Alí 2002 “La reforma petrolera venezolana de 2001” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) Vol. 8, N° 2.
- Sonntag, Heinz 1984 “Estado y desarrollo sociopolítico en Venezuela” en *Revista Cuadernos del Cendes* (Caracas) N° 4.
- Sunkel, Osvaldo 2005 “Conversación con Osvaldo Sunkel” en *Revista Cuadernos del Cendes* (Caracas) N° 60.
- Valecillos, Héctor 2001 (1994) “Reajuste estructural de la economía y desindustrialización en Venezuela” en Valecillos, Héctor y Bello,

Omar *La economía contemporánea de Venezuela 1990-1999. Ensayos escogidos* (Caracas: BCV).

Viergutz, Alan 2002 “La política energética venezolana y el sector privado” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) Vol. 8, N° 2.

Vilas, Carlos M. 2003 “¿Populismos reciclados o neoliberalismo a secas?” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) Vol. 9, N° 3.

Se terminó de imprimir en el mes de agosto de 2006
en los talleres de Cromosete Gráfica e Editora Ltda.

Rua Uhlant, 307 - Vila Ema
03283-000 - São Paulo - SP, Brasil
Primera impresión, 1.000 ejemplares

Impresso no Brasil